

Edición especial

AMÉRICAS

AGOSTO 2009

US \$4,00 CAN \$6,00

**CRISIS ECONÓMICA GLOBAL:
ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS**

**CINCUENTA AÑOS DE
DERECHOS HUMANOS**

**EDUCACIÓN CON
EXPERIENCIA PRÁCTICA**

**JUANES: MÚSICA
DE ESPERANZA**

**MONARCAS
MISTERIOSAS**



Américas es una publicación
de la Organización de los Estados
Americanos, organismo regional
del hemisferio occidental.



SECRETARIO GENERAL
JOSÉ MIGUEL INSULZA

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
ALBERT R. RAMDÍN

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERNAS
ADAM BLACKWELL

ESTADOS MIEMBROS:

ANTIGUA Y BARBUDA
ARGENTINA
BAHAMAS
BARBADOS
BELIZE
BOLIVIA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
DOMINICA
ECUADOR
EL SALVADOR
ESTADOS UNIDOS
GRANADA
GUATEMALA
GUYANA
HAÍTÍ
HONDURAS
JAMAICA
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
REPÚBLICA DOMINICANA
SANTA LUCÍA
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
ST KITTS Y NEVIS
SURINAME
TRINIDAD Y TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

OBSERVADORES PERMANENTES:

Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia,
Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Benín,
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, China, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Federación de Rusia,
Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana,
Grecia, Guinea Ecuatorial, Hungría, India,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán,
Letonia, Líbano, Luxemburgo, Marruecos,
Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Polonia,
Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Checa, República de
Corea, Rumanía, Santa Sede, Serbia y
Montenegro, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia,
Túnez, Turquía, Ucrania, Unión Europea,
Vanuatu y Yemen.

*Las opiniones expresadas en los artículos publicados no son
necesariamente las de la OEA o sus Estados Miembros.
Los límites y los nombres que figuran en los mapas no tienen
necesariamente la aceptación de la OEA.*

Portada: *Sin título* (detalle), por la pintora brasileña Tomie Ohtake
De la colección permanente del Museo de Arte de las Américas de la OEA

AMÉRICAS

JULIO/AGOSTO, 2009
VOLUMEN 61, NÚMERO 4

ARTÍCULOS

- 3 SOBRE ESTA EDICIÓN ESPECIAL
- 4 SECRETARIO GENERAL JOSÉ MIGUEL INSULZA
- 6 **INFORME SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA**
PUNTOS DE VISTA DE AUCIA BÁRCENA
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NICOLÁS EYZAGUIRRE
PETER HAKIM
ENRIQUE V. IGLESIAS
LUIS ALBERTO MORENO
ANA MARÍA SAN JUAN
JUAN SOMAVIA
- 20 QUINTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
- 22 CUMBRE DEL G20 EN LONDRES
- 24 SECRETARIO GENERAL ADJUNTO ALBERT R. RAMDIN
- 26 EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
por Santiago Canton
La Organización de los Estados Americanos continúa su compromiso en favor del reconocimiento de la dignidad a través de la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- 36 CORAZÓN Y CANTO
por Mark Holston
La superestrella colombiana Juanes está despertando la conciencia acerca de los devastadores efectos de las minas terrestres antipersonal
- 44 COMPROMISO EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN
por Chris Hardman
Desde la instrucción agrícola en Centroamérica y las experiencias de enseñanza rural en la Argentina, hasta los adelantos en el lenguaje de señas en Jamaica, el desarrollo de la educación está favoreciendo la nueva generación de intelectuales que en el futuro dirigirá el hemisferio y el mundo
- 56 A VUELO DE MONARCA
por Adriana Herrera
Gracias a esfuerzos de científicos y entusiastas de la naturaleza de todo el mundo, la majestuosidad de los santuarios de mariposas monarca en México está protegida
- 64 LATITUDES



página 36



página 26



página 44



página 56

Coordinadora edición especial

Patricia Esquenazi

AMÉRICAS

Directora

Carmen Marina Gutiérrez

Gerente editorial

Amparo Trujillo

Edición de fotografías

James Patrick Kiernan

Edición en español

Carlos Tripodi

Amparo Trujillo

Edición en inglés

Kathy Ogle

Diseño

Watermark Design Office

Colaboradores

Alejandro Balaguer

Adriana Bianco

Mike Ceaser

Jeffrey P. Cohn

Victor Englebert

Chris Hardman

Mark Holston

Larry Luxner

Celeste Mackenzie

Suzanne Murphy-Larronde

Elizabeth Coonrod Martínez

Héctor Peña Díaz

Jaime Perales Contreras

Ricardo Carrasco Stuparich

Judy Waytiuk

Louis Werner

Joyce Gregory Wyels

Circulación

Kristina Mollusk

Prensa

United Litho

Américas (131-770) is published bimonthly, in English and Spanish, by the Organization of American States. Mailing address: Américas/OAS, 1889 F Street, NW, Washington, DC 20006-4499. ©2009 *Américas*. **One-year subscription:** US\$21. Periodicals postage paid at Washington, DC, and at additional mailing offices. Additional airmail/postage charges: US\$11 to Canada, Mexico, Central and South America; US\$15 to all other countries. Subscription information, call **1-800-222-5405**. **Single and back-issues:** US\$6. **Postmaster: Send address changes** to *Américas* Magazine, PO Box 3000, Denville, NJ 07834-3000. Articles reprinted with prior written permission only.

Subscriber services on-line: www.Americas.oas.org

(SPANISH ISSN 0379-0975)

La XXXIX Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en San Pedro Sula, Honduras, se abrió como escenario privilegiado para discutir temas trascendentes que afectan al continente en este momento de su historia. Su lema: «Hacia una cultura de la NO Violencia», apunta a un fenómeno encadenado a la pobreza, persistente, difícil de enfrentar y de gran complejidad al momento de buscar soluciones.

Indisolublemente ligado a las economías más frágiles, el tema de la violencia adquiere otra dimensión en medio de la crisis económica mundial que ya llega a América Latina y el Caribe.

En este contexto, la crisis financiera global, su génesis, su impacto, sus consecuencias, impone la necesidad de buscar y escuchar el análisis de economistas y científicos políticos de la región, que ponen en la coyuntura histórica, una mirada acuciosa y profunda, para descifrar por qué y cómo pasó lo que pasó.

En marzo de 2007, los medios de comunicación de todo el mundo encendieron luces rojas sobre lo inexorable de una crisis financiera de gran alcance: la más grande economía del mundo daba señales de desaceleración en el mercado de la vivienda. En los meses siguientes, una sucesión de quiebras de las más grandes compañías financieras estadounidenses dio forma a una crisis sin precedentes. Posteriormente, el impacto de la bancarrota de las grandes corporaciones, recaía en el ciudadano común.

La crisis se había desatado y tenía dimensión internacional.

Según consignan las cifras y las estadísticas de los organismos especializados, desde hacía cinco años, América Latina y El Caribe, crecían a un ritmo sostenido. Por primera vez, en décadas, este continente mostraba índices alentadores de un crecimiento económico mantenido que proyectaba vitalidad y optimismo a los países de la región. Sin embargo, una tendencia recesiva ya comienza a envolverlo, y las mismas voces que se alegraban de las perspectivas de crecimiento económico, hoy expresan preocupación. Sin tener responsabilidad en la génesis de la crisis, nuestro continente, al decir de la mayoría de los analistas, pagará serias consecuencias, tanto en lo económico, como en lo social y político.

Una burbuja de endeudamiento que partió en la economía más poderosa del planeta, terminó por afectar a las economías de todo el mundo, grandes, medianas y, por cierto, a las pequeñas. Así las cosas, la globalización, una realidad innegable, muestra su rostro más imperfecto e induce a muchos a exigir instrumentos adecuados de coordinación internacional y a pensar en la necesidad de construir una institucionalidad financiera que haga frente a situaciones de

esta dimensión. En un mundo global, hay que crear instrumentos para enfrentar situaciones de riesgo y corregir la fragilidad de la institucionalidad económica de los países más vulnerables, aunque a todas luces, ya es tarde.

Si bien es cierto que en un principio imperó un cierto optimismo sobre cómo podría América Latina y el Caribe asumir el peso de la crisis —la región exhibía un crecimiento alentador— hoy, cuando ésta golpea bruscamente al empleo y otras áreas sensibles de la economía, la tendencia es a pensar que vienen momentos de inestabilidad social y política. Conforme transcurre el tiempo, la gente pasa de la comprensión al desagrado y exige que se restablezcan las condiciones de bienestar que ha perdido. Según la opinión de los analistas, todas las economías serán alcanzadas severamente por la recesión y el desempleo. En esta eventualidad las consecuencias sociopolíticas están ahí. Y el riesgo de la inestabilidad, está a la vuelta de la esquina.

Para muchos, en el actual escenario mundial —de realidades interdependientes— el sistema capitalista ha evidenciado errores que deben ser corregidos. Para otros, el capitalismo mostró fallas estructurales que insinúan cambios mayores. En un momento de grandes reflexiones, las voces que se imponen hablan de regulación, y apuntan a que el capitalismo debe ser regulado por una autoridad que exprese democráticamente el interés de la comunidad. En una sociedad democrática, la voluntad de todos se expresa a través de la autoridad política del Estado.

Las primeras miradas que adivinan una tímida luz al final del túnel, sugieren absorber esta traumática experiencia de manera positiva y abrir espacios a intentos responsables de crear instrumentos de este tiempo para solucionar problemas de este tiempo. El análisis predominante atribuye un rol determinante a la autoridad democrática; debe evitar excesos, corregir errores, impedir abusos. La democracia, la búsqueda de consensos, el compromiso, juegan un papel de gran trascendencia. Si el diálogo nacional puede articular medidas de resguardo del bien común en los países, lo mismo debe ocurrir en el plano internacional.

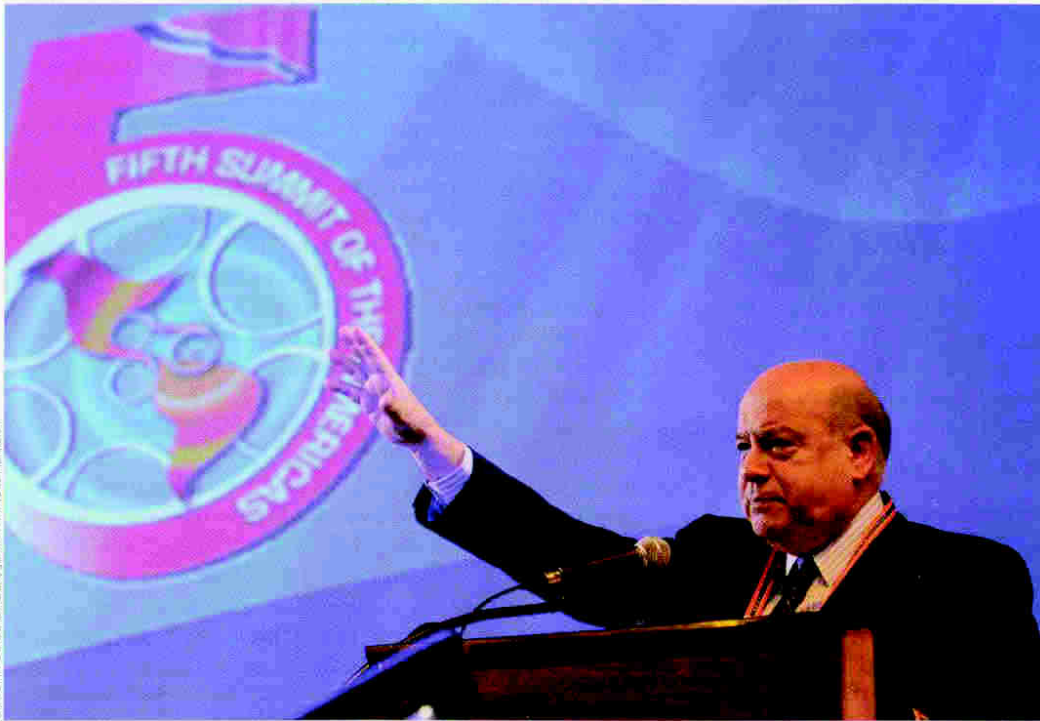
Connotados personajes del mundo de la política y la economía, escriben en este número especial de *Américas*. Su opinión es valiosa no sólo por el renombre de cada uno de ellos, sino porque sus palabras contribuirán, sin duda, a comprender mejor por qué pasó lo que pasó. Su pensamiento puede ser un aporte para construir consensos, tan necesarios en este punto de la historia. También para orientar en la dirección correcta hacia grandes acuerdos nacionales e internacionales, al parecer único mecanismo que permitirá salir de la oscuridad y ver de nuevo la luz.

—Patricia Esquenazi
Directora del Departamento de Prensa, OEA

LA CRISIS Y SUS EFECTOS POLÍTICOS

por José Miguel Insulza

Secretario General, Organización de los Estados Americanos



La crisis económica ha sido una doble mala noticia para América Latina y el Caribe. Primero, porque una recesión que no fue provocada en la región amenaza con afectarla gravemente, reduciendo o paralizando su crecimiento, con graves consecuencias sociales, especialmente en el empleo y la reducción de la pobreza. Segundo, porque pone término, de manera abrupta, a un ciclo de más de siete años positivos, en que la región en su conjunto creció más que en los quince años anteriores, lo cual redundó también en un mejoramiento de las condiciones de vida de un número importante de sus habitantes.

Por ello es natural que la reacción ante una crisis originada en el mundo desarrollado y especialmente en los Estados Unidos, fuera negar que ella pudiera tener un impacto grave en nuestros países. Hasta los primeros meses de este año, se escuchaba mucho en América Latina que la crisis no era generada en la región, que no la alcanzaría o que estábamos preparados para hacerle frente, sin reconocer algo evidente: que si nuestro crecimiento había sido impulsado en gran medida por una expansión de nuestro sector externo, la crisis en las principales economías mundiales tenía que afectarnos, como ya ha ocurrido. La reducción del volumen y valor de nuestras exportaciones, la caída del flujo de turistas, la disminución en las remesas desde el exterior, han llevado a una reducción de la actividad económica y del empleo.

La situación se complica sustantivamente por la enorme reducción del flujo de recursos financieros hacia la región. Es cierto que nuestras economías están mejor preparadas, porque han aplicado por lo general políticas macroeconómicas prudentes, han acumulado reservas y sus sistemas financieros no se hallan contaminados. Pero no todos pueden llevar adelante las políticas anticíclicas, porque no tienen capital suficiente para ello y porque el crédito está cerrado para nuestros países. Se nos recomienda adoptar políticas públicas vigorosas para contrarrestar los efectos de la crisis; pero sin flujos financieros externos, ello es imposible.

Los riesgos políticos de esta situación son evidentes. Si se considera que varios millones de ciudadanos de América Latina y el Caribe han salido de la pobreza en los últimos siete años, la reducción de empleos les crea una amenaza directa de volver a caer en esa condición, algo que no estarán dispuestos a aceptar. Lo mismo puede decirse de los muchos millones más que constituyen la vasta «clase media» latinoamericana, que aumentó muchísimo en la última década. Más que de los pobres, es de los desocupados y los empobrecidos que pueden esperarse manifestaciones de descontento o incluso acciones desestabilizadoras, especialmente si alguna fuerza política opositora busca capitalizar esa situación.

Se ha dicho mucho que nuestros países están mejor preparados para enfrentar la crisis, debido al crecimiento de los años anteriores. Algo similar puede decirse en el ámbito de la política. Varios años de democracia han generado una mayor fortaleza institucional; las cifras de adhesión a la democracia en la región son importantes, aunque no espectaculares; y existen numerosos países que enfrentan elecciones en poco tiempo más. Las elecciones pueden ser vistas, en este sentido, como un camino

institucional para canalizar el descontento. Es posible que ello ocasione más alternancia y perjudique a los incumbentes, pero desde el punto de la institucionalidad estatal fortalece la democracia y permite esperar que la crisis no se lleve, también en lo político, lo que se ha ganado en estos años.

Pero no es posible suponer que el normal juego de la democracia sea suficiente para enfrentar los conflictos sociales y políticos que la reducción de la actividad económica va a generar en nuestros países. A nivel nacional, aunque se reconozca que la crisis proviene del exterior, tarde o temprano ella será achacada total o parcialmente al gobierno de turno, especialmente allí donde las divisiones políticas son profundas y anteriores. En el plano internacional, en el funcionamiento habitual del capitalismo, son de temer políticas destinadas a «exportar el desempleo», a través de medidas proteccionistas, políticas migratorias restrictivas, restricción de flujos financieros, etc.

La respuesta es materia de políticas públicas. Como nunca en las décadas recientes, lo público adquiere una inusitada preeminencia en la solución de la crisis y los mercados esperan que los que adoptan las decisiones políticas tomen la iniciativa. La crisis ha generado también una oportunidad para la política. Tras años de escuchar la repetida frase de que «el gobierno es parte del problema y no de la solución», hoy todos miran al gobierno y a los que gobiernan, en busca de soluciones, tanto a nivel nacional como internacional.

En primer lugar, el tema de la gobernanza, o si se prefiere, de la calidad del gobierno adquiere la mayor importancia. La crisis encuentra a nuestros países en un momento de transición, en que ya se han abandonado en toda la región las políticas que asignaban al mercado un papel mucho más preponderante que el que debe tener y se reconocía ampliamente la necesidad de políticas públicas que impulsen el crecimiento y la igualdad; pero en que nuestros Estados no tienen aún la fortaleza y la capacidad para asumir plenamente esa responsabilidad. Nuestros servicios sociales públicos son aún insuficientes y en muchos países la estatalidad es aún débil y está mal preparada.

Por ello se requiere una reducción del conflicto político al interior de los países, para hacer frente a la crisis con políticas públicas consensuadas que aseguren unidad nacional y continuidad. Es un hecho que allí donde los gobiernos disfrutaban de un mayor apoyo y donde la oposición está dispuesta a prestar su concurso, es posible poner en marcha las políticas de estímulo del crecimiento y el empleo que hoy son necesarias y es también posible alcanzar acuerdos para fortalecer efectivamente la capacidad estatal.

Por cierto, no es posible esperar cheques en blanco. Por una parte, se entiende que los consensos políticos y sociales pueden forjarse mejor en torno a políticas que privilegien claramente la generación de empleo y la protección social de los más necesitados. Por otro lado, la ciudadanía puede estar dispuesta a aceptar un nivel mayor de actividad pública; pero exigirá a la vez mayor transparencia y mayor eficacia.

En segundo lugar, se requiere una amplia cooperación internacional. No existe solamente una forma de superar la crisis. Una manera tradicional de hacerlo ha sido la de traspasar los efectos a los más débiles. Como resultado, cuando la economía global ha retornado al equilibrio, ha dejado tras de sí una secuela de pobreza y años de retraso. En plena era de la globalización, es de esperar que los miembros más fuertes del sistema internacional no se limiten a poner orden unilateralmente en su propia economía, sino que también apoyen soluciones para un conjunto cada vez más interdependiente.

Un tema central es el del financiamiento externo. La importancia que en la reciente Cumbre de las Américas asignaron nuestros Jefes de Estado y Gobierno a este tema ahorra todo comentario. Ese financiamiento externo vital sólo puede provenir hoy de las instituciones financieras públicas internacionales. Los gobiernos de la región acogieron positivamente los anuncios de la reciente reunión del G20 en Londres, pero esperan aún saber de qué manera y en que montos fluirán hacia ellos los recursos necesarios; igualmente esperan medidas de aumento del capital de sus propias instituciones financieras, del Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el BCIE y el CDB.

Pero el flujo de recursos externos no es la única forma de cooperación. Los países de la región sólo podrán defenderse o recuperarse si se mantienen y restablecen los flujos comerciales fuertemente reducidos por la crisis. Las demandas de evitar el proteccionismo, defender el libre flujo de bienes y servicios y no recargar injustamente en los inmigrantes y los débiles los efectos de la crisis, forman parte también de la cooperación internacional requerida.

Si es efectivo que en toda crisis hay también una oportunidad, ésta es la oportunidad dorada de mostrar el valor de las políticas públicas para promover el bien común. Es también una gran oportunidad para mostrar ese «rostro humano de la globalización» tan ausente en los últimos años. ■

ESTA VEZ LA HISTORIA NO DARÁ VUELTAS EN REDONDO

por Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

«Ya esto me lo sé de memoria, ...»

«Es como si el tiempo diera vueltas en redondo

y hubiéramos vuelto al principio.»

—Gabriel García Márquez

HA TRANSCURRIDO POCO MAS de un semestre desde aquel 15 de septiembre de 2008, en que Lehman Brothers Holdings Inc. declaró su quiebra, y vimos desencadenarse, con cierto asombro, una serie de acontecimientos que llevaron al sistema económico internacional a la actual crisis.

Mucho ha pasado desde entonces, y si bien la crisis ha sido dura tanto en su lugar de origen como también en lejanas latitudes, hay algunos hechos que me permiten afirmar con prudente confianza, que a diferencia de las anteriores crisis, esta vez las cosas serán diferentes para América Latina y el Caribe.

Lo anterior por tres razones, la primera es que la región cursaba un ciclo económico de histórica bonanza al momento en que se desencadenó la crisis y por ello, se encuentra en un buen pie aunque no inmune para hacerle frente y con un acervo de experiencias positivas en políticas públicas en el combate a la pobreza.

La segunda es que para enfrentar sus efectos y atacar sus causas se ha conformado rápidamente un sentido común global acuñado muy bien en la siguiente declaración: «una crisis global exige una solución global».

Y por último, tanto o más importante que las anteriores, es que esta vez, a diferencia de otros episodios similares —como la crisis de la deuda de la década de los ochenta—, la crisis golpea a la región en un tiempo en que puede exhibir, ya por largo rato, muy buenas credenciales democráticas.

En efecto, la actual crisis sorprendió a América Latina y el Caribe en un período histórico de bonanza que no se apreciaba en la región desde hacía cuatro décadas. Gozamos de un quinquenio (2003-2007) de crecimiento económico que se expandió de un 2,1% en 2003 a un 5,7% en 2007. Fue un impulso que permitió a la región crecer todavía durante 2008, a un 4,6%; la más acelerada expansión registrada en 40 años que este año llega a su fin.

Este lustro también fue extraordinariamente positivo en materia social: en el



período transcurrido entre 2002 y 2007 la pobreza disminuyó 10 puntos porcentuales, de un 44% en 2002 a un 34,1% en 2007; la indigencia a su vez se redujo casi 7 puntos porcentuales, de un 19,4% a un 12,6%. A ello debemos sumar que la tasa de desempleo bajó en promedio de un 11% a un 7,5% entre 2003 y 2008 y los ingresos laborales por ocupado aumentaron en casi todos los países. En la mayoría de los países aumentaron las reservas internacionales que, en promedio, alcanzaron alrededor del 13% del PIB regional. Hubo también una marcada disminución de la deuda pública externa. Para una muestra de los 12 países sudamericanos más México, Honduras y El Salvador dicha deuda pasó del 24% al 8% del PIB entre 2003 y 2008.

El gasto público total continuó, aunque moderadamente, su tendencia al aumento como porcentaje del PIB, que se inició a comienzos de la década pasada. Y quizá uno de los hechos más significativos sea que la mayoría de los países redujo la brecha de ingresos entre el quintil más rico y el más pobre entre 2002 y 2007. Vale la pena resaltar sin embargo, que en la mayoría de los países los quintiles más pobres han incrementado su ingreso gracias a políticas del Estado y no por aumento de la productividad.

Además en estos años se acumuló en la región un conjunto importante de políticas públicas activas que permitieron sacar de la pobreza y la indigencia a millones de latinoamericanos. No estoy segura sin embargo que con ello se hayan sentado bases firmes para avanzar hacia una mayor cohesión social, ya que no hemos podido vencer la heterogeneidad productiva que azota la región por décadas y que ha impedido avanzar realmente en el tema de la desigualdad.

Todo lo anterior permite reflexionar profundamente sobre el hecho de que si bien hemos podido afrontar estos primeros meses en mejor pie, la región sigue teniendo problemas estructurales de gran envergadura. Sólo con una política de largo plazo que aborde el crecimiento con equidad y sostenibilidad ambiental será posible avanzar hacia un verdadero desarrollo.

Por otra parte, hemos visto como el sentido común y una visión de un multilateralismo amplio y cooperativo ha permitido asumir que una crisis de carácter global debe ser enfrentada globalmente. Dos reuniones del G 20, cuya amplia membresía y representación en términos económicos y demográficos las invistió de una gran legitimidad, se han sucedido primero en Washington y luego en Londres y han alcanzado acuerdos impensados para la rigidez ideológica que imperaba años atrás.

Qué lejos están recientes declaraciones del G20 del lenguaje del «Consenso de Washington».

Por último, la existencia de una institucionalidad democrática en la región y el respeto al estado de derecho y de las libertades civiles y políticas constituyen una garantía cierta, que esta vez, el ajuste no se hará en contra de los más vulnerables como fue en el pasado. Esta vez dichos grupos, cual más cual menos, cuentan en algunos casos con una importante representación política, y en otros han sido sus propios representantes quienes han conquistado democráticamente sus gobiernos.

A lo anterior debemos sumar la firme voluntad de nuestros líderes de evitar cometer los errores del pasado. La lección más importante que debemos extraer de las anteriores crisis es que recuperarse de los niveles de pobreza que una crisis genera lleva mucho más tiempo, prácticamente el doble, que la recuperación del crecimiento económico.

Por ello es que nos preocupan los efectos que la crisis tendrá sobre los factores determinantes de la reducción de la pobreza.

En primer lugar, los efectos en la generación y calidad del empleo. En este primer trimestre ya se observa una difícil-

tad para generar empleo productivo y de calidad, y preocupa el desplazamiento hacia la informalidad y la ilegalidad. Sobre la base de información derivada de episodios anteriores de enfriamiento de las economías de la región y los primeros datos empíricos de 2009, para este año cabe esperar un aumento de la tasa de desempleo de 1,0 a 1,3 puntos porcentuales (lo que correspondería a un aumento de entre 2,6 y 3,4 millones en el número de desempleados). Sin duda la informalidad aumentará, reflejando la caída del empleo formal protegido. A estos efectos debemos sumar la eventual disminución de las remesas, sobre todo en países con alto porcentaje de familias dependientes de los ingresos laborales que envían sus miembros residentes en los Estados Unidos y España (en especial a los países centroamericanos).

En segundo lugar, los efectos en el gasto social, que dependerán de que los países tengan o no recursos para aplicar políticas anticíclicas. Ello nos preocupa, ya que si consideramos que en el quintil más pobre, la mitad del ingreso total corresponde a transferencias. Y por otra parte, porque el gasto social que está mejor blindado es la seguridad social, pero es justamente el componente del gasto social más regresivo en términos distributivos, pues el grueso va a parar a los bolsillos de los quintiles superiores. Una restricción del financiamiento y la cooperación internacional tendría consecuencias catastróficas para los países cuyos programas de alivio de la pobreza dependen en gran medida de tales recursos.

Si bien no es posible contar con estimaciones precisas del impacto de la crisis sobre la pobreza y el empleo en este momento, sí se pueden inferir tendencias a partir de las crisis que la región ha vivido en los últimos 25 años, en el marco de la alta volatilidad del crecimiento económico.

Si analizamos la tendencia a largo plazo en cuanto a evolución del PIB per cápita en la región y el principal ciclo de recesión que la afectó —durante gran parte de los años ochenta—, se aprecia que el PIB per cápita antes de la crisis se recuperó en alrededor de 14 años. En cambio, para bajar a los niveles de pobreza que se registraban al comenzar la crisis, la región se tomó 25 años. Es importante destacar la desigualdad como

factor decisivo en los rápidos deterioros y las lentas recuperaciones económicas y sociales. Estimular la demanda agregada sin inclusión social puede ser no solo insuficiente sino hasta riesgoso, porque puede generar mayor inequidad.

Hasta hoy, reina la incertidumbre en cuanto a la profundidad y la duración de esta coyuntura. Lo que sí sabemos, en cambio, que hemos aprendido de crisis pasadas —en esta región en particular—, es que se requieren medidas rápidas y audaces a nivel nacional e internacional. De hecho, los gobiernos de la región han dispuesto una amplia gama de medidas, tales como inyectar liquidez a los mercados financieros, aumentar los subsidios, reducir los impuestos y elevar el gasto público, sobre todo en infraestructura.

La crisis provoca un impacto muy diferente de un país a otro, así como es diferente la disponibilidad de recursos para hacerle frente. Las políticas públicas no solo enfrentan el reto de estabilizar el crecimiento económico con medidas anticíclicas, sino también de idear instrumentos para proteger a la población más vulnerable de estos impactos distributivos negativos.

Se necesitan recursos para financiar estas medidas y salvaguardar los logros sociales conseguidos en los últimos años y con ello evitar un retroceso que puede tener graves repercusiones políticas. Se requiere el apoyo de las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo y por eso es crucial que la comunidad internacional garantice que se dispondrá de los recursos suficientes para proporcionar la liquidez y el financiamiento necesarios a los organismos regionales. Esto permitirá innovar y crear ágiles líneas de financiamiento que se adapten a las necesidades y realidades de los países de la región.

En este cuadro de políticas para hacer frente a la crisis son decisivas las políticas pro empleo, de transferencias hacia los grupos pobres y vulnerables (transferencias condicionadas, seguros de desempleo, empleo de emergencia en sectores de infraestructura física y social), y que eviten retrocesos en capital humano (educación y salud).

Enfrentar la actual crisis supone inmediatamente una inflexión en la dimensión de la política y políticas, tanto interna de los países como internacional.

Repensar el progreso es hoy más urgente que nunca. Debemos entonces plantearnos las preguntas en torno al tipo de pactos sociales y políticos que necesitamos para edificar un Estado eficaz en la regulación y

el control de las fuerzas del mercado, impulsor de oportunidades de prosperidad para aquéllos que las demandan y protector suficiente para aquéllos cuya vulnerabilidad los aleja, momentánea o permanentemente, de las oportunidades de bienestar.

Para esto es fundamental la calidad de la política y la calidad de la democracia.

La agenda regional debe estar sujeta al escrutinio de la mayoría de sus ciudadanos. Debe implementar procesos de toma de decisiones a partir de una agenda con probidad, donde los distintos intereses se transparenten y el diálogo, la negociación y el consenso constituyan herramientas fundamentales en las decisiones que se tomen.

Hay que escapar del debate estéril de más o menos Estado, o el de la supremacía del Estado sobre la del mercado. Se trata de encontrar una agenda que reivindique el papel del Estado en la buena conducción de la política pública y valore el mercado, como el mecanismo más eficiente para asignar recursos e impulsar el crecimiento. Sin embargo, hay que estar consciente de que este no se hace cargo de la desigualdad y la inclusión social. Se trata de construir una agenda pública en la que quepa un sector privado pujante y una ciudadanía robusta, dotada de derechos y posibilidades ciertas de ejercerlos.

Los resultados económicos satisfactorios del último lustro, el acervo democrático acumulado en las últimas dos décadas y los consensos globales alcanzados en estos seis meses en torno a las prioridades y medidas a adoptar para hacer frente a esta crisis y echar las bases de una nueva arquitectura financiera internacional. Sumado al hecho innegable de un mejor clima de entendimiento hemisférico, basado en el respeto a la diversidad, cuyos primeros destellos tuvimos la oportunidad de apreciar en Puerto España con ocasión en la quinta Cumbre de las Américas, y una mayor seguridad en nuestras posiciones regionales como lo demostró la primera Conferencia de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo realizada en Bahía, Brasil, nos permiten abrigar un moderado y cauteloso optimismo, en cuanto a que esta vez no repetiremos los errores del pasado y sabremos cuidar nuestro avances sociales, nuestra institucionalidad democrática y nuestras oportunidades de crecimiento económico.

No se trata sólo de volver al mismo sitio donde estábamos antes de la crisis. Se trata de otro futuro. Por ello, a menos de un año de iniciar nuestras fiestas del bicentenario presiento que podemos comenzar a poner fin a nuestros largos «años de soledad». ❁

MÁS ALLÁ DE LA CRISIS INTERNACIONAL: ECONOMÍA, POLÍTICA Y CULTURA

por Fernando Henrique Cardoso
Ex presidente del Brasil

LA CRISIS QUE ENFRENTAMOS hoy día es la culminación de un proceso de cambios que se han venido suscitando a lo largo de los últimos cuarenta años. El cambio principal fue una revolución tecnológica que, sin considerar el tiempo y el espacio, fue un factor decisivo para el colapso del sistema soviético y la aceleración de la globalización.

Primero en los Estados Unidos y luego en Europa y Japón, las nuevas tecnologías cambiaron no sólo la economía sino la sociedad; lo contrario ocurrió en los países socialistas en donde la rigidez burocrática hizo que la innovación se limitara al ámbito militar. La comunicación instantánea dio lugar a las plataformas electrónicas indispensables para la expansión del capital financiero a escala mundial.

Cabe recordar que el capitalismo siempre tuvo una vocación expansionista. Su forma actual es la globalización económica y financiera que difundió el capitalismo de mercado por todo el mundo. El desarrollo prodigioso de China es la etapa más avanzada de este proceso continuo de expansión.

En los primeros años del milenio, el aumento de la riqueza y del comercio mundial parecía una tendencia irreversible, cuyos beneficios se extenderían gradualmente a muchos países si no a todos. En los países en desarrollo, una especie de «social democracia para los pobres» permitiría asegurar la mayoría de las condiciones de vida de los grandes grupos de excluidos a través de redes de protección social y transferencias directas de ingresos.

Si la revolución tecnológica fue el motor de la globalización, el capital financiero fue el motor del proceso de creación de la riqueza. Las nuevas tecnologías que permitieron la generación de productos financieros cada vez más complejos y oscuros intensificaron una prosperidad aparentemente sin límites.

El origen de la crisis de 2008 se encuentra en la forma en que se dio esta expansión, en la ausencia de un mínimo de regulación y transparencia. La crisis, en sí, no es un hecho nuevo ni sorprendente. Las crisis son una constante en la historia del capitalismo.

Cada vez que la expansión del capital financiero va más allá de un cierto límite, hay una ruptura. De repente, quienes tenían deudas ya no pudieron pagar y ello provocó una reacción en cadena que afectó a todo el sistema.

Al igual que en el pasado, en el meollo de la crisis actual se encuentra un desfase entre activos financieros y reales. Lo particular de esta crisis y que acelera la velocidad y amplitud de la misma es la magnitud de este desfase y el grado de interdependencia de la economía mundial.

La autodestrucción del fundamentalismo del mercado es el mayor fracaso en la historia de la regulación económica y acaba con el mito de que los mercados eran capaces de corregir por sí mismos su rumbo. De la noche a la mañana, el miedo sustituyó a la ganancia. La crisis de liquidez se transformó en crisis de confianza y el colapso del crédito paralizó la economía real.

El impacto es desastroso en la medida en que las fábricas dejan de ser el corazón del capitalismo y ceden su lugar a los bancos. Sin los bancos, las fábricas se detienen. Incluso en la actualidad nadie sabe hasta qué grado se han contaminado los bancos y las empresas con los activos tóxicos.

La crisis generó una pérdida brutal en la riqueza mundial, valorada entre 30 y 50 mil billones de dólares. Estamos ante una hemorragia sin control. Los programas que han concebido los gobiernos para salvar a las empresas al borde del colapso constituyen un inmenso proceso de socialización de pérdidas.

No obstante, persiste la esperanza de que, en cierto momento, los inversionistas empiecen de nuevo a comprar tan pronto los precios lleguen a un nivel muy bajo. La prioridad hoy es impedir que la recesión se transforme en depresión. Lo primero es controlar el incendio y después qué hacer con las cenizas.

Sin embargo, las perspectivas son sombrías. Esta no es una crisis que se resolverá en unos cuantos meses para que después todo vuelva a la normalidad. Se trata de una crisis profunda cuya solución implicará una reorganización drástica de prioridades. Como siempre, el futuro dependerá de lo que hagan los actores; es decir, de aquéllo que hagan los gobiernos, los empresarios y los ciudadanos.



El vehemente reclamo de equidad, solidaridad social, equilibrio ecológico, confianza y transparencia se ha convertido en parte de un discurso moral y es también un imperativo político. El desafío para los líderes del mundo es aglutinar a los ciudadanos y a la sociedad en torno a un programa de cambios fundamentado en nuevos valores y una nueva cultura.

Algunos puntos de esta agenda son ineludibles. La economía requiere una regulación de alcance mundial así como la política mundial requiere un gobierno democrático mundial.

Las instituciones financieras internacionales deben ser fortalecidas y sometidas a un proceso de democratización. Es preciso que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales dispongan de más recursos y de un sistema de toma de decisiones en el que se vea reflejado el creciente poder de los países emergentes. La reciente reunión del G20 en Londres da testimonio de que se reconoce esta nueva realidad geopolítica.

Un renovado espíritu de colaboración internacional es la mejor receta para corregir las fallas de un sistema financiero dilapidado y evitar el retorno de un proteccionismo desastroso.

La redefinición de las fuentes de energía, elemento clave para combatir el calentamiento global, es un punto en el que coinciden las agendas económica y ecológica. El tema de la energía limpia y

LOS FUNDAMENTOS MÁS SÓLIDOS DAN DIVIDENDOS

por Nicolás Eyzaguirre

Director, Departamento del Hemisferio Occidental, FMI



renovable tiene ramificaciones culturales más amplias, como los cambios en estilo de vida y los patrones de consumo.

La crisis ha provocado una enorme pérdida en la riqueza mundial, por lo cual, probablemente, el mundo tendrá que enfrentar tasas de crecimiento reducidas por algunos años. Y será necesario que todo mundo haga ajustes dolorosos. La próxima década será una época de tribulaciones y, por ello, reviste suma importancia el debate sobre la «calidad de vida» y su significado en diferentes culturas y sociedades.

Es esencial una reducción en las tensiones en todo el mundo para que los gobiernos puedan concentrar sus recursos en la reconstrucción de sus economías.

El ocaso de la hegemonía de los Estados Unidos y el ascenso de los países emergentes han dado lugar a un mundo multipolar y multicultural en el que el poder de persuasión (*soft power*) puede ser más eficaz que el poder militar. El espíritu de libertad, creatividad, experimentación e innovación podrán ser las nuevas condiciones de liderazgo en el mundo que surgirá de la crisis.

Nuestra inteligencia colectiva enfrentará nuevos retos, tales como el combinar la defensa de los derechos humanos universales con el respeto por la diversidad cultural y cómo crear un nuevo equilibrio entre libertad personal y solidaridad social.

Las anteriores podrían considerarse como preguntas abiertas cuya respuesta sólo podrá encontrarse en el surgimiento de una cultura nueva, fundamentada en valores nuevos que nos lleven más allá del individualismo posesivo y del sofocante colectivismo. Este es nuestro reto y camino a seguir para el futuro. 彡

LA CRISIS ACTUAL ES verdaderamente grave y globalizada. Se espera que la economía mundial tenga el peor desempeño desde la Gran Depresión y que todas las regiones del mundo se vean afectadas. En este contexto, América Latina no va a ser inmune. La crisis representa una confluencia de shocks negativos a la balanza de pagos externa de la región: condiciones financieras restrictivas; menor demanda por las exportaciones de la región; una caída de los precios de las materias primas, y una desaceleración de los ingresos por remesas, el turismo y la inversión extranjera directa. Estos shocks son de una envergadura sin precedentes desde los años treinta y están afectando a todos los países de América Latina en mayor o menor medida.

Pero América Latina se encuentra mucho mejor preparada para enfrentar la crisis que en el pasado. Esto se debe al importante progreso que muchos países han hecho en la última década. En muchos casos las políticas macroeconómicas y financieras han sido y son más sólidas y han resultado en mejoras sustanciales en la composición de los balances tanto del sector privado como el público. Por ejemplo, las finanzas públicas están en una situación mucho más fuerte. Asimismo, la inflación ha caído significativamente en la mayoría de los países. En marcado contraste con situaciones pasadas, los arreglos cambiarios más flexibles, posibilitados por el éxito en el control de la inflación y en la supervisión de los descalces de monedas de bancos y empresas, han actuado como un amortiguador importante de los shocks externos. A pesar de que muchas monedas se han depreciado fuertemente, no se han producido efectos desestabilizadores. La banca regional además casi no está expuesta a los efectos del *subprime*, los sistemas financieros —mucho mejor regulados y supervisados— han resistido bien las tensiones recientes y no ha habido problemas sistémicos en los bancos de la

región. Como resultado, los países de la región no están enfrentando crisis fiscales o financieras en las propias economías, en contraste con lo que está ocurriendo en otras regiones del mundo y con lo que ocurriera en el pasado.

Muchos de los gobiernos de América Latina han adoptado políticas activas para atenuar los efectos de la crisis (también llamadas políticas anticíclicas). Las autoridades monetarias han provisto recursos al sistema crediticio y liquidez en los mercados monetarios de manera proactiva. Y varios bancos centrales han reducido sus tasas de interés de referencia de manera significativa, ayudando a mitigar el efecto de la menor demanda en sus economías. Asimismo, muchos países están usando el espacio fiscal que han creado en el pasado para mantener o aumentar los niveles de gasto público, por ejemplo en infraestructura y en los sectores sociales. Estos esfuerzos van a contribuir a que las economías estén mejor preparadas para retomar el crecimiento

una vez que las condiciones internacionales mejoren. Al mismo tiempo, el costo social será más moderado. Esta insistencia, es una diferencia fundamental con el pasado, cuando las políticas macroeconómicas tuvieron que tornarse más restrictivas frente a shocks externos para intentar evitar crisis en las economías de América Latina. Por ejemplo, durante los años ochenta, la crisis financiera de principios de la década tuvo efectos prolongados sobre las políticas macroeconómicas y deprimió el crecimiento de la región por muchos años.

A pesar de estos esfuerzos, nuestro pronóstico es que la actividad económica de la región caiga un 1,5 por ciento en 2009, más o menos igual que el pronóstico para el promedio de la economía mundial. Aunque no lo parezca, este pronóstico representa un desempeño relativamente bueno para la región: en el pasado, una crisis de esta magnitud hubiese ocasionado una desaceleración mucho mayor. Para 2010, nuestra proyección central para la región es de un crecimiento de alrededor del 1,5 por ciento. Esta recuperación, que es más rápida que la proyectada para los países avanzados, también es resultado de la solidez de las posiciones fiscal y financieras.

Frente a este contexto, ¿cuáles son las recomendaciones de política para la región? ¿Y qué papel puede desempeñar el Fondo Monetario Internacional?

Con respecto al sistema financiero, como se ha dicho, no ha habido tensiones fuertes. Sin embargo, el deterioro en las perspectivas económicas requiere que las entidades reguladoras de la región permanezcan muy alertas. En lo inmediato, el foco de atención debe ser el escrutinio de los indicadores

macroeconómicos y el fortalecimiento de los sistemas de alerta anticipada para detectar y corregir problemas antes de que alcancen dimensiones sistémicas. A mediano plazo, estos sistemas deben modificarse en línea con lo que resulte del debate internacional sobre reformas de regulación financiera.

En cuanto a políticas macroeconómicas anticíclicas, es importante que estas sean adecuadas y sostenibles, en línea con las posibilidades de cada país. En este sentido, hay diferencias en la región. En general, los países que más han invertido en mejorar los marcos de política macroeconómica tienen más margen de acción. Otros países enfrentan más restricciones. En estos casos, políticas demasiado ambiciosas pueden afectar la credibilidad y desencadenar reacciones adversas en los mercados, agravando vulnerabilidades que puedan existir en el sistema financiero. También es necesario evitar políticas que beneficien a un país en el corto plazo a expensas de otros (como las restricciones al comercio).

En el actual contexto internacional, el FMI está cumpliendo un papel importante. En los países avanzados, estamos haciendo un seguimiento estricto y ayudando a coordinar las políticas macroeconómicas para procurar que las políticas internas no sean contraproducentes a nivel mundial. En los países emergentes, estamos ofreciendo financiamiento para aliviar presiones externas y por tanto ampliar el margen de maniobra que las autoridades tienen para diseñar las políticas macroeconómicas. Con este objetivo, el FMI ha flexibilizado sus mecanismos de financiamiento con el propósito de facilitar su adaptación a las circunstancias de cada país. Por ejemplo, se estableció una nueva línea de crédito (Línea de Crédito

Flexible) para proporcionar financiamiento en gran escala y de acceso inmediato a los países con fundamentos económicos y políticas muy sólidas que pudieran enfrentar dificultades en los mercados. Los acuerdos precautorios de alto acceso también actúan como un seguro para fortalecer la confianza.

En América Latina, el financiamiento del FMI ya ha alcanzado niveles significativos. En pocos meses, se han aprobado créditos por más de 60.000 millones de dólares para la región. Por ejemplo, en el Caribe, varios países han solicitado financiamiento al FMI o han aumentado el monto de los acuerdos vigentes. Varios países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador y Guatemala) han firmado acuerdos de carácter precautorio y de alto acceso. Por último, México y Colombia han respondido a la invitación del FMI y han solicitado la nueva Línea de Crédito Flexible.

En resumen, aunque ninguna región del mundo ha sido inmune al impacto de la recesión mundial, América Latina va a tener un mejor desempeño que si hubiera tenido que enfrentar shocks similares diez o incluso cinco años atrás. Esto es motivo para ser optimistas respecto al futuro. El importante progreso que han hecho muchos países en fortalecer sus políticas macroeconómicas, sumado a las respuestas proactivas de las autoridades, están dando dividendos. ❀

RAMIFICACIONES POLÍTICAS DE LA CRISIS ECONÓMICA

por Peter Hakim

Presidente, Diálogo Interamericano

«POSIBLEMENTE NADIE PUEDA saber cuán prolongada y profunda resulte la recesión». Ese es el punto de vista de Robert Solow, laureado con el Premio Nobel de Economía, expresado en la más reciente *New York Review of Books*. Lo que sí sabemos es que cuanto más prolongada y profunda sea la crisis económica, mayores serán las perspectivas de cambios políticos drásticos y profundos en América Latina y el resto del mundo. La aplicación de políticas erráticas e indecisas es la consecuencia inevitable de la caída de las economías, el creciente desempleo, la disminución de los ingresos de la clase media, el aumento de la pobreza y los cortes en los servicios públicos, efectos que ahora se pronostican en la región. Como en el pasado, las autoridades se convertirán en el blanco de las críticas y recriminaciones del público, y las políticas probablemente resulten más polarizadas y combativas.

La crisis mundial ya está teniendo un impacto en la política y la gobernabilidad de algunos países. Las naciones de Europa central y oriental han experimentado demostraciones masivas y disturbios. Ha disminuido el apoyo público de líderes clave de Europa occidental —Gordon Brown, Nicolas Sarkozy y José Luis Rodríguez Zapatero— y sus gobiernos se han debilitado. El fracaso económico condujo a la caída del gobierno de Islandia hace apenas una semana.

Hasta ahora, sin embargo, el impacto político ha sido apenas visible en América Latina y el Caribe, probablemente porque la crisis ha arribado comparativamente tarde a la región. Sin duda, aún no han surgido patrones claros. En algunos países, el apoyo del público a los líderes nacionales se ha incrementado, aunque las economías hayan comenzado a decaer. En Colombia y México, la atención ha seguido concentrándose en otros aspectos. En Chile, la Presidenta Michelle Bachelet (y el Ministro de Hacienda Luis Velasco) han mejorado recientemente su posición en las encuestas de opinión, aparentemente



porque los chilenos han apreciado el hecho de que la economía de su país mostró mejores resultados que otras de la región. La mejor posición en las encuestas del Presidente Alan García sugiere asimismo que los peruanos también reconocen sus resultados económicos relativamente favorables.

En la medida en que la economía brasileña se ha desacelerado y el desempleo ha crecido en los últimos meses, el Presidente Lula da Silva ha caído de 8 a 10 puntos en las encuestas, aunque aún conserva un apoyo sin precedentes de alrededor del 75 por ciento. Otros gobernantes —entre ellos Óscar Arias de Costa Rica, Tabaré Vázquez del Uruguay y Leonel Fernández de la República Dominicana— han mantenido su posición en las encuestas. Incluso en El Salvador, donde la oposición ganó recientemente la presidencia, y en Panamá, donde parece casi seguro que ocurrirá lo mismo el 3 de mayo, los presidentes mantienen un apoyo público mayoritario. Con seguridad, los presidentes de ciertos países como Fernando Lugo del Paraguay y Alvaro

Colom de Guatemala, por ejemplo, siguen siendo muy impopulares, pero por razones en gran medida no relacionados con la crisis económica.

Los líderes latinoamericanos están alertas a los desafíos políticos que pronto habrán de enfrentar. El presidente venezolano Hugo Chávez eligió la fecha más cercana posible para un referéndum destinado a eliminar la limitación de los plazos presidenciales para que no le quite votos el posible deterioro económico de su país, dependiente del petróleo. De igual forma, el presidente ecuatoriano Rafael Correa aceleró la compleción de la nueva constitución de su país para que su aprobación (y su consiguiente elección como presidente) se produzcan antes de que comience la caída económica. La Presidenta Cristina Fernández de la Argentina obtuvo la aprobación legislativa para adelantar la fecha de las críticas elecciones legislativas de octubre a junio, cuando espera que sus posibilidades sean mejores.

En 2009 se realizarán otras cuatro elecciones presidenciales, nuevamente sin un patrón claro de posibles resultados. Dos de esas elecciones —en Chile y Uruguay— son muy competitivas, y en cualquiera de los dos países la profundización de la recesión posiblemente favorezca al candidato de la oposición, con seguridad más conservador, aunque otros temas siguen revistiendo importancia. En Honduras, los resultados generalmente erráticos del actual gobierno probablemente hagan ganar al candidato opositor. Por ahora, la economía de Bolivia está protegida por una gran reserva financiera, y el electorado del país, regional y étnicamente polarizado, casi con certeza reelegirá al Presidente Evo Morales en las elecciones de diciembre. Aunque la economía mexicana ha sido una de las más afectadas en América Latina, el aspecto económico desempeñará un papel secundario (en comparación con los problemas de seguridad y de criminalidad) en las críticas elecciones legislativas.

En 2010 se realizarán tres elecciones presidenciales. Cualquier declinación económica en Costa Rica favorecerá a la oposición, que perdió las últimas elecciones de 2006 por menos del 1 por ciento de los votos, aunque los candidatos y la campaña también moldearán los resultados. Faltando 18 meses para las elecciones, las encuestas brasileñas sugieren que el partido gobernante deberá librar una dura batalla para mantener el poder, particularmente desde que al posible candidato acaba de diagnosticársele cáncer. Y un deterioro de la economía hará la lucha aún más difícil. Las elecciones colombianas del mes de mayo dependerán de que el Presidente Uribe obtenga la aprobación del cambio constitucional requerido para permitirle presentarse para un tercer período. Si ello, ocurre, quizá gane independientemente del estado de la economía.

La pérdida de elecciones no ha sido la única consecuencia de los deficientes resultados económicos en América Latina. En los últimos años, el estancamiento o el deterioro de la economía fueron la causa subyacente de violentas demostraciones en Argentina, Bolivia y Ecuador, que hicieron renunciar o derrocaron a presidentes electos. Aunque parezca menos probable hoy, la actual crisis financiera ciertamente podría producir disturbios populares y protestas masivas que podrían conducir a la salida prematura de líderes elegidos libremente. Pero tales episodios son difíciles de prever. Lo más alentador es la escasa preocupación acerca de la participación militar en tales perturbaciones, aunque no pueda descontarse completamente. Y hay algunos países en los que los gobiernos podrían incluso recurrir a la represión para mantenerse en el poder.

En muchos países de América Latina, la principal preocupación sería que el deterioro económico debilite la credibilidad y la autoridad de los

gobiernos. La mayoría de los presidentes y primeros ministros de la región mantendrán sus cargos y terminarán sus períodos, aunque algunos de ellos perderán la capacidad de movilizar el apoyo a sus políticas y programas y de abordar eficazmente los problemas del país.

En las actuales circunstancias, puede ser difícil que los gobiernos latinoamericanos mantengan la calidad de la gestión económica que entre 2004 y 2008 se tradujeron en cinco años de sólido crecimiento, inflación históricamente baja y una significativa reducción de la pobreza, y los mejores resultados económicos experimentados por la región en una generación. Algunos analistas sugieren que la crisis, además, terminará las políticas orientadas hacia el mercado en América Latina y hará que la región retorne a economías más introspectivas y estatizadas. Puede que tengan razón, pero esa conclusión todavía es prematura. De hecho, aquellos países que han manejado sus economías en forma ortodoxa y disciplinada —Chile, Brasil, Perú, Colombia e incluso México— probablemente surjan de la crisis más vigorosos que aquellos que han aplicado enfoques más populistas, como Argentina y Venezuela. Además, los países que siguen una trayectoria ortodoxa quizá tengan más acceso a los capitales externos necesarios, ya sea de fuentes privadas o públicas, para mitigar los efectos de la crisis e iniciar una recuperación. Los votantes pueden elegir continuar con las políticas y los líderes que han producido buenos resultados.

También es difícil saber en qué forma la perturbación financiera podría afectar las relaciones interamericanas. La crisis ha provocado un nuevo resentimiento contra

los Estados Unidos —a quien se considera responsable de los problemas económicos de América Latina— pero ese resentimiento se ha visto moderado por la elección del Presidente Obama y el enfoque aplicado hasta ahora con respecto a la región. En general, los gobiernos latinoamericanos han visto con buenos ojos la estrategia de Washington para enfrentar la crisis económica y su apoyo a la reforma de las instituciones financieras internacionales. ¿Durará el «efecto Obama»? Si la crisis se prolonga varios años, el resentimiento puede resurgir en América Latina. Cuanto más se prolongue y más profunda sea, las consideraciones políticas internas pueden empujar a los Estados Unidos a la adopción de políticas menos favorables para la región. Además, podrían surgir tensiones en los países latinoamericanos en la medida en que la impaciencia de los votantes obligue a los gobiernos a adoptar enfoques más nacionalistas y proteccionistas para revitalizar sus economías.

En los próximos meses, y quizá años, probablemente la economía y las políticas de América Latina se verán sujetas a mayores tensiones que en los últimos tiempos. No será fácil resistir antiguas tentaciones como el nacionalismo, el proteccionismo, el populismo y el antiamericanismo. La calidad de las instituciones y el liderazgo político harán una importante diferencia. Todos hemos oído que América Latina está hoy mejor preparada que nunca para enfrentar los desafíos económicos que supone la crisis mundial. También hay razones para creer que la región está mejor preparada para enfrentar asimismo los desafíos políticos y de gobernabilidad. ❁

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS

por Enrique V. Iglesias
Secretario General Iberoamericano

EL MUNDO SE ENCUENTRA conmovido por una crisis económica de proporciones históricas. Las comparaciones con experiencias pasadas son siempre difíciles. Se recuerda mucho la crisis del 29, aunque también se destacan sus diferencias. Pero ciertamente estamos ante una crisis que tendrá profundas repercusiones, no sólo en la economía mundial, sino también en los procesos de globalización, en las sociedades y en la política.

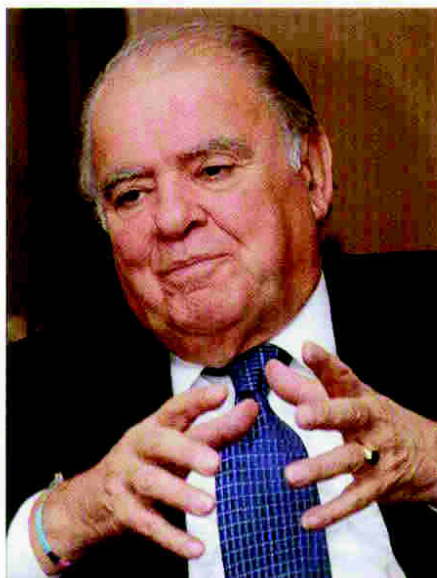
Ante este fenómeno nos encontramos con limitaciones importantes de las ideas y las categorías de análisis. La profesión económica no pudo anticipar la magnitud de la crisis y, tampoco puede ponerse de acuerdo en las medidas a adoptar. Hubo que desempolvar al maestro Keynes para arrojarse en sus consejos.

La incapacidad de anticipación y las dudas sobre las políticas estuvieron y están igualmente presentes en las organizaciones internacionales.

Sabemos sí, algunas cosas. Sabemos que la crisis habrá de terminar en algún momento. Pero no sabemos «cuándo» y, menos aun, «cómo». Muy pocos economistas predicen que la duración será breve. Yo acompaño a los que estiman que esta crisis será larga y penosa.

Pero sabemos otra cosa: que el punto al que nos llevará esta crisis no nos devolverá al punto de partida. Nos dejará en otra realidad económica, social y política. Seguramente ese mundo será mejor. Tenemos que apelar a la experiencia histórica y a la capacidad de recuperación de la sociedad de todos los tiempos. Pero el problema es cómo llegar a ese nuevo mundo con los menores costos posibles, tanto económicos como sociales y políticos. Y esa tarea no es por cierto fácil, pero es la gran pregunta que tenemos que proponernos.

Las causas de la crisis han sido debidamente analizadas. Exceso de liquidez abundante y barata alimentó peligrosas burbujas en la inmobiliaria, en las bolsas, o en las materias primas. Fracasaron dramáticamente los organismos de control y de supervisión, especialmente en los sistemas financieros no bancarios. Es francamente inexcusable que los organismos de regulación y control



en los países centrales hayan fracasado en forma tan flagrante y que, en la misma forma, lo hayan hecho las organizaciones privadas de calificación de riesgos. Es posible que la crisis no hubiera podido evitarse. Pero lo cierto es que su costo debió haber sido mucho menor si esos fracasos se hubieran evitado.

En última instancia, el elemento que se ha destruido ha sido la confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas. El sistema capitalista se asienta en la confianza y cuando ella falla, todo el sistema hace agua. Y no es fácil recomponer la confianza una vez que se quiebra.

Digamos que, como nunca en el pasado, los gobiernos han respondido rápida y vigorosamente a los desafíos presentados. Gran diferencia con el periodo de los años treinta, con el que solemos comparar el momento actual. Reacción rápida y vigorosa la de los bancos centrales y de las tesorerías, abiertas a todo tipo de apoyo de bancos e instituciones privadas. Y rápido también el convencimiento de que esta crisis global solo puede resolverse con soluciones globales, debidamente concertadas. Ahí está el Grupo de los 20 como testimonio de esta realidad, reunido ya en dos ocasiones.

Las soluciones por cierto, no son fáciles y además la realidad se resiste a responder salvo algunas señales muy débiles en algunos países. Esta resistencia de la crisis a dejarse dominar por las medidas convencionales y en la dimensión en que se están aplicando, da cuenta de la complejidad de los fenómenos que estamos enfrentados.

Pienso que, sin embargo, esas medidas como las que fueron puestas en marcha por el G20, operan en la buena dirección. Esos indicadores, muy débiles y frágiles aún, demuestran que comienzan a dar sus frutos.

Pienso que como se ha repetido, hasta tanto la situación bancaria no se estabilice será imposible generar la confianza que permita recomponer el crédito y por tanto los impulsos del crecimiento. Y esa situación dista de haberse resuelto a pesar de las intervenciones realizadas. Recompuesta la confianza en los sistemas bancarios comenzará un lento proceso de recuperación de la inversión y de la confianza del consumidor.

La naturaleza global de la crisis ha provocado asimismo una caída espectacular y dramática del comercio mundial, alrededor del 9%, lo que cual agrava la situación de todos los países, pero especialmente de aquéllos que basaron en el comercio internacional su estrategia de crecimiento. Japón y Alemania y Singapur son buenos ejemplos, aunque no son los únicos. ¡La globalización está mostrando su cara negativa!

Me preocupan dos hechos que acompañan ese proceso. Por una parte, la pérdida de confianza en las políticas económicas que fueron consolidándose a lo largo de los últimos años. Se duda de algunas políticas que creíamos incorporadas a la buena conducción económica. Por ejemplo, la crisis está creando dudas sobre la validez de la apertura externa en países que han basado su crecimiento en esa hipótesis incuestionada en los últimos años. Las crisis financieras, debido a las malas prácticas de las finanzas no bancarias, crea desconfianza en las instituciones privadas en beneficio de la banca pública. Las

políticas de responsabilidad fiscal se ven hoy relegadas por la urgencia de intervenir en favor del mantenimiento o del gasto público, sin que podamos evaluar los riesgos que se incurren hacia el futuro. Y así podríamos continuar con la puesta en duda de muchas de las políticas que creíamos que eran puntos pacíficos de los modelos de crecimiento económico. ¿Será que esos principios están obsoletos y que habrá de cambiarlos? ¿O estamos ante un periodo de crisis que los coloca en el plano de la duda, para volver a ellos superada la misma?

No es fácil responder a esa pregunta. En todo caso, lo que cabe reflexionar es cuáles serán los parámetros del nuevo mundo en el que aterrizaremos una vez superada la crisis.

Pienso que en lo financiero será un mundo mucho más regulado y supervisado, especialmente en lo que tiene que ver con las operaciones financieras no bancarias que, como dijimos, quedaron, lamentablemente, fuera del radar de la regulación y la supervisión en las últimas décadas. Pienso además que habrá una vuelta a la banca tradicional que opera sobre la base de recursos propios, antes que sobre los papeles inflados del pasado.

En todo caso, el sistema financiero, varias veces mayor que el producto mundial, habrá de reducirse considerablemente. Con ello también muchos de los servicios financieros tradicionales. Una hipótesis creíble es que habremos de volver a una banca tradicional la que deberá tener, entre sus funciones, una atención especial a la banca de inversión, derrumbada dramáticamente en los últimos meses.

Pienso que en lo económico la globalización también sentirá los impactos de la crisis. Con nuevas valoraciones de los mercados internos frente a los internacionales que llevará a muchos países a encontrar mayor dinamismo en la explotación de esos mercados internos,

que en la exportación. Espero que no se vuelva atrás en cuanto a desconocer los inmensos beneficios que ha tenido para la humanidad el avance del comercio internacional, que deberá seguir impulsando las oportunidades de crecimiento en el mundo.

Pienso, asimismo, que será un mundo más frugal. No sólo porque la crisis afectará el poder de compra especialmente de las clases medias sino porque las incertidumbres y el desempleo propiciarán un consumidor mucho más prudente. Con lo cual, el crecimiento del consumo, que ha caído espectacularmente en los países centrales, no será seguido con una recomposición de los niveles de partida. La pérdida de dinamismo de este motor del crecimiento, que estuvo detrás de la gran expansión de la economía mundial en los últimos años, deberá compensarse con el consumo público orientado a resolver las grandes tareas sociales y ambientales pendientes.

En respeto al tiempo no voy a incursionar en los impactos sociales como políticos, pero ciertamente que esta nueva etapa de la humanidad tendrá proyecciones inevitables sobre la vida, la sociedad y la política.

En esta oportunidad, la América Latina como región emergente no ha sido parte del problema y sí es parte de la salida. No hay forma de evitar las repercusiones del ciclo mundial. Pero ciertamente, estamos mejor preparados y con líneas de defensa como no tuvimos nunca en el pasado. Esta crisis, 10 ó 20 años atrás hubiera sido francamente devastadora. Hoy puede ser controlada mucho mejor, aunque lamentablemente no evitada.

Los gobiernos están alertas y promoviendo políticas en la buena dirección. Su eficacia dependerá de la forma como reaccionen las economías centrales y si se mantiene un crecimiento vigoroso de la economía china y, en menor medida, la india. Como nunca en el pasado, nos interesa el ciclo de los Estados Unidos, la Unión Europea, y el Japón pero en igual grado y para algunos países aún más, de las economías asiáticas y, muy especialmente, la china.

Pero como se ha dicho en múltiples ocasiones, la crisis abre oportunidades además de sus costos sobre la economía y la sociedad. Esas oportunidades nos fuerzan a pensar en el futuro que ciertamente lo seguimos viendo positivo y para el cual debemos prepararnos en dos direcciones.

Enfrentados a la crisis, además de políticas internas rápidas y coordinadas debemos explorar las oportunidades que nos ofrece la cooperación regional en todos los niveles: comerciales, financieros, tecnológicos, de inversión, de empresas multilaterales, etc. Esta región en desarrollo tiene la historia más antigua de cooperación regional. Basta recordar que esta institución, la OEA, tiene sus raíces en el encuentro Panamericano de 1888 y que la integración regional cumple este año 50 años, con resultados positivos aunque magros con relación a las expectativas. Por tanto, si esta región con la experiencia de partida acumulada, no puede poner en marcha hoy y frente a la crisis nuevos mecanismos de cooperación, ¿qué otra región podría hacerlo?

El segundo punto es el de prepararnos para el modelo de crecimiento que nos va a convocar el mundo que vendrá, avanzando en todas las formas de innovación posible. Desde los modelos de crecimiento, hasta las políticas sociales. Desde las reformas del Estado a las reformas de la empresa. En Iberoamérica, este es el año de la innovación. Sería bueno aprovecharlo para reflexionar sobre el papel que una política de innovación amplia nos puede ofrecer para entrar con vigor en la construcción de una América Latina y del Caribe vigorosa, creativa y, socialmente mucho más justa. ❁

RESPUESTAS FRENTE A LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

por Luis Alberto Moreno

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

AMÉRICA LATINA Y EL Caribe encaran una difícil situación. La región, que ha disfrutado a lo largo de los últimos años de un crecimiento sostenido basado en un favorable desempeño macroeconómico, tiene que enfrentar ahora los rigores de una de las crisis internacionales más severas de la historia. Esta crisis, exógena a América Latina y el Caribe, es especialmente grave tanto por su amplitud como por su velocidad en la destrucción de riqueza.

En un primer momento, las economías emergentes y los países en desarrollo podían parecer al abrigo de una crisis originada en las economías más avanzadas. Igualmente, la mejor situación de América Latina y el Caribe respecto a pasadas ocasiones, era una razón para el optimismo a la hora de enfrentar esta situación de dificultad. Sin embargo, los hechos han demostrado que la región no es inmune a los efectos de esta crisis, aun si nuestra mejor posición es un elemento a favor a la hora de contrarrestar sus efectos.

El contagio de la crisis en la región ha sido variado, a través de canales distintos pero intercomunicados. La desaceleración del crecimiento a nivel global, reflejado en la profunda contracción del comercio internacional, ha provocado una severa caída de los precios de las materias primas, fuente clave de ingresos para muchos de nuestros países. Por otro lado, la crisis ha restringido de manera significativa el acceso al financiamiento, limitando el margen de acción de los gobiernos frente a la crisis y obligando a postergar proyectos clave de inversión para el desarrollo, en áreas tan fundamentales como la infraestructura. Unido a todo esto, la reducción en el envío de remesas supone un duro golpe a nuestros países al erosionar los ingresos de las familias, especialmente de las más pobres y vulnerables.

Con todo, el impacto de estos canales sobre el crecimiento, el empleo, los salarios y los indicadores de desarrollo social dista de ser uniforme entre los países. Varias de nuestras economías son especialmente vulnerables y, aunque la mayoría de los países de la región están hoy mejor



preparados, no todos gozan del mismo margen de maniobra para responder a la crisis.

La diferente situación de vulnerabilidad pivota sobre diferentes ejes. Por un lado, las grandes diferencias en la estructura productiva inciden directamente en su capacidad frente a los cambios en la demanda internacional. Así, las economías con sectores económicos más diversificados se encuentran en una posición de mayor fortaleza frente a aquellas sujetas a las oscilaciones en unos pocos productos. Del mismo modo, la distinta situación macroeconómica de los países de la región, explica en gran parte la existencia o no de margen para financiar políticas anticíclicas efectivas.

La amplia variedad en el grado de protección social ofrecida por nuestros países resulta también un factor crítico en este momento de crisis, en la que ésta amenaza directamente los logros en la reducción de la pobreza y mejora de la cobertura social alcanzada en los últimos años. Así, los países que realizaron un esfuerzo particular, dotándose de sistemas de aseguramiento, provisión de servicios sociales básicos y protección social, están mejor preparados para resistir la crisis y preservar sus avances. De manera paralela, el desarrollo institucional de nuestros países va a ser fundamental en un momento de crisis. Aquéllos que han avanzado más en la tarea de dotarse de un sistema político y de gobierno efectivo serán capaces de incorporar las crecientes demandas sociales y gestionarlas de una manera constructiva.

La crisis financiera mundial está exigiendo respuestas firmes y concretas por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe. Estas respuestas, en forma de políticas, suponen un gasto adicional que no todos los países están en capacidad de afrontar. Hasta las economías que gozan de una posición fiscal más fuerte, pueden ver esa fortaleza debilitarse y afrontar riesgos de liquidez e incluso de solvencia en el escenario de una recesión dilatada en el tiempo.

Es por ello que para nuestros países –y especialmente los más vulnerables– resulta fundamental proteger la posición fiscal y la disponibilidad de liquidez actuales. Así, las políticas de estímulo fiscal deben ser consideradas y evaluadas cuidadosamente con esta precaución en mente. En este contexto, resulta imperativo que el debate y discusión políticos entre los actores implicados –gobierno, poder legislativo, sociedad civil, etc. – se caractericen por una altura de miras y un compromiso claro por el pragmatismo. La urgencia y gravedad de los desafíos que enfrentamos hace que las luchas ideológicas y de intereses sólo nos alejen más de la necesidad de tomar soluciones prontas y eficaces.

Nuestros gobiernos pueden desarrollar diferentes intervenciones a la hora de proteger el empleo y la cobertura social. Así, respecto al empleo, contamos con políticas de retención laboral y capacitación, empleo temporal focalizado en los más pobres y servicios de intermediación laboral. En el área social resaltan la expansión de Programas de Transferencias Condicionadas a la población estructuralmente pobre no cubierta, protección del gasto en educación y salud, programas de nutrición y, en general, programas para ampliar el acceso a la educación preescolar y básica, y a los servicios de nutrición y salud. Algunos países podrían también considerar programas temporales y focalizados de suspensión de copagos para estos servicios.

CRISIS ADENTRO: BALANCE Y DESAFÍOS DE LA REGIÓN EN EL PRÓXIMO QUINQUENIO

por Ana María San Juan

Directora del Centro para la Paz, Universidad Central de Venezuela

Las políticas sociales y de empleo son pues piedra clave en el arco de protección para nuestras sociedades. Sin embargo, la defensa y preservación de los logros sociales no significa no tomar un enfoque proactivo y de innovación. Estas políticas deben orientarse a asegurar la competitividad y productividad. En esta línea, la inversión en infraestructura, por ejemplo, es fundamental a la hora de dotarnos de estructuras que garanticen la competitividad de los sectores productivos, al tiempo que es una herramienta de política anticíclica privilegiada.

La actual crisis está teniendo un profundo impacto en la manera de repensar las relaciones económicas y el papel de los poderes públicos, erosionando la noción de que los mercados se autocorrijen. Este es pues un momento para innovar en la manera en la que Estado y mercado se relacionan, superando la tradicional dicotomía de más o menos intervención, por una visión más constructiva y cooperativa, que garantice un crecimiento sostenido e inclusivo para nuestras sociedades.

América Latina y el Caribe están hoy en una posición más favorable para afrontar la crisis que en el pasado. Nuestra región ha mejorado sus fundamentos económicos, ha apuntalado sus instituciones y, probablemente lo más importante de todo, ha sabido aprender de los errores de antaño. Es por ello que esta situación nos sitúa frente a un doble reto: ser capaces de atajar de manera urgente las necesidades que plantea la crisis en el corto plazo sin dejar de un lado nuestro trabajo en el largo plazo. En este doble esfuerzo, el BID es y va a ser un socio cercano y comprometido con la región, trabajando con firmeza en esta coyuntura de gravedad pero sin perder de vista el horizonte de futuro de América Latina y el Caribe.

✻

EN PLENO DESARROLLO de una crisis con epicentro foráneo y de consecuencias inciertas, América Latina comienza el proceso de sumergirse a fondo en una suerte de colapso de la gobernanza económica y financiera global, con instrumentos de navegación para otra mar y tempestades, distintas en forma y profundidad. La crisis sigue su curso, impactando las coordenadas convencionales del orden internacional, con su aparejo de externalidades negativas que ya nadie duda, repercutirán en el orden político y la estabilidad regional. Sin sucumbir al «pesimismo de la inteligencia o al optimismo de la voluntad» vale la pena hacer un balance de los logros y vulnerabilidades acumuladas en la región en esta última década, para posteriormente estimar el tipo de reformas estructurales pendientes, en lo político, económico y social, de manera de encarar con éxito un futuro que va a ser diferente a partir de esta crisis. Es necesario superar la percepción de los actores y el estado de ánimo inicial de cierta complacencia sobre el origen y responsables de la crisis, para encontrar el cauce institucional de las transformaciones sociales requeridas en estos tiempos complejos, mediante el fortalecimiento de las potencialidades de los nuevos actores políticos y sociales y teniendo como objetivo central la profundización de la democracia. En los últimos años, la región acumuló fortalezas democráticas, un importante desarrollo del pluralismo político, estabilidad institucional, crecimiento económico y cotas importantes en materia de reducción de la pobreza.

Sin embargo, estos activos podrían entrar en cuestión en el corto plazo. A nivel general, vale la pena tener en cuenta que la crisis, en sus tres vertientes (financiera, energética y alimentaria), ha puesto de manifiesto una crisis más honda que toca las bases del capitalismo. Está planteada la reforma del sistema económico que hemos tenido en los últimos cincuenta años. Se habla de modificar a fondo los esquemas institucionales según los cuales se han



organizado la producción de bienes y servicios. La gravedad del planeta en el orden ecológico es, en muchos sentidos, importante, el telón de fondo de la presente crisis mundial y las nuevas tecnologías en campos como el de la informática, la biotecnología y la nanotecnología definirán, en buena medida, el carácter de las transformaciones. Se ve venir, así pues, un elenco de reformas que, desde luego, tendrán mucho que ver con la suerte política, económica y social de los países latinoamericanos. A corto plazo, la crisis mundial dejará sentir efectos importantes en las economías latinoamericanas, por lo general muy vulnerables desde el punto de vista de su estructura productiva. En general tendrán dificultades significativas, al margen de sus inclinaciones político-ideológicas, debido, en particular, a la caída de los precios de sus principales productos de exportación al mercado internacional, además de las medidas proteccionistas, en los países más desarrollados. Bajarán las tasas de crecimiento, crecerá el déficit en la balanza comercial y la inflación y el desempleo mostrarán índices altos, incidiendo de manera relevante en las cifras relativas al nivel de vida promedio, agravando la situación de pobreza y desigualdad, a pesar de una previsible

mayor intervención de los respectivos Estados. Los efectos sobre los distintos países no serán iguales, dependerán, en general, de la naturaleza de su inserción en la economía mundial y de sus sistemas político-institucionales.

Precisamente, en términos institucionales y políticos, luego del quinquenio de la abundancia y según los datos disponibles, en la mayoría de los países de América Latina, si bien hay menos pobres, no se avanzó tanto como lo previsto y necesario para romper el círculo perverso de la desigualdad, lo que afecta centralmente las posibilidades de expansión de la ciudadanía social a todo el contingente de excluidos de la región.

La mayoría de países comparte como rasgo común altos grados de democracia electoral y política pero grandes limitaciones todavía en el acceso y extensión de la democracia social. Los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión se combinan problemáticamente con un contexto económico ahora incierto y un universo político en expansión. En la circunstancia presente, los actuales gobiernos de la región deben desarrollar sus políticas públicas, con unas bases electorales heterogéneas e impacientes, con altas expectativas de cambio social y político, en un escenario restrictivo para la redistribución eficiente y equitativa de recursos, considerando no solo sus economías frágiles y vulnerables frente a la crisis, sino también la pervivencia de estructuras administrativas no modernizadas y permeadas por diversos intereses. Estructuralmente, las causas de estos problemas deben buscarse en las limitaciones del Estado latinoamericano en sí mismo, vinculadas con su arquitectura histórica, sus problemas de neutralidad, la calidad y competencia de las burocracias públicas y el resultado de

las reformas administrativas llevadas a cabo en los años noventa. El cambio político en la región en la primera década del siglo XXI, caracterizado, entre otros, por la emergencia de nuevos actores políticos y sociales, renovadas demandas de inclusión y la búsqueda de mecanismos inéditos de participación en la actividad pública y en la contraloría social, no fue suficiente para democratizar el Estado y con ello a la sociedad.

Sobre la política, la euforia que acompañó el advenimiento de la democracia muestra algunos límites. El establecimiento de la democracia es distinto a consolidarla y allí han estado las velocidades variables de la región en las últimas dos décadas. Nuestras democracias, en su mayoría con débil capacidad estatal y de baja intensidad de ciudadanía, tienen elevados impedimentos para alcanzar la democratización social. Por ello, la democracia en América Latina está en un proceso de reconceptualización, en el que se debe buscar, necesariamente, una definición maximalista y comprehensiva, que tenga en cuenta la creciente utilización de los mecanismos de democracia directa, las nuevas expresiones de la política a través de canales no convencionales y la ampliación de la esfera pública por parte de grupos históricamente excluidos del ejercicio de la política, todas las cuales tienen como objetivo el logro de la inclusión social en el marco jurídico de la democracia. Hay más democracia, pero las sociedades exigen una mejor democracia y, sobre todo, una mayor democracia social. Adicionalmente a estas tensiones, los gobiernos democráticos deben enfrentar ahora desafíos económicos y sociales desalentadores, por lo que necesitan mejorar la capacidad estatal, la *accountability* y la representatividad, a fin de superar las severas pruebas de

gobernanza previsible. Desde hace más de una década y coincidiendo con el colapso de algunos de los sistemas políticos nacionales, la política es cada vez más una dinámica de articulaciones provisorias y cambiantes, en constante proceso de «mutación», que genera macroprocesos de dinámicas aceleradas e impactos sustantivos en las formas de representatividad y ejercicio de la política. Pareciera que no es una crisis episódica sino el signo de una metamorfosis o una mutación de la representación, es decir, una transformación hacia otros vínculos en la comunidad política. Los requerimientos cruciales del nuevo orden estarán de nuevo concentrados en el papel del Estado y la política. Más y mejor Estado, repolitizar la política y redemocratizar la democracia, son algunos de los desafíos para los diferentes países y la región en su conjunto en el próximo quinquenio.

En cuanto a la desigualdad, en las últimas décadas, la expansión de la ciudadanía social no ha seguido el mismo ritmo del de la ciudadanía política, por lo que se mantiene todavía vigente la expresión de la existencia en la región, de «democracias con baja intensidad de ciudadanía». Persiste una exclusión social cada vez más compleja en sus expresiones y con tendencia a volverse refractaria a las intervenciones institucionales. Pese a lo avanzado, el perfil de la desigualdad no se ha alterado significativamente, por lo que amplios contingentes sociales, aunque menos pobres, perviven aun sin un estatuto pleno de ciudadanía. Las consecuencias políticas de un aumento de la pobreza previsible en los próximos años pueden ser extremadamente complejas, desestabilizadoras y antisistémicas, toda vez que la mayoría de las sociedades de la región permanecen movilizadas en la búsqueda de su inclusión social, lo que en

CRISIS: UNA RESPUESTA BASADA EN LA JUSTICIA SOCIAL Y EL TRABAJO DECENTE

por Juan Somavia

Director General, Organización Internacional del Trabajo (OIT)

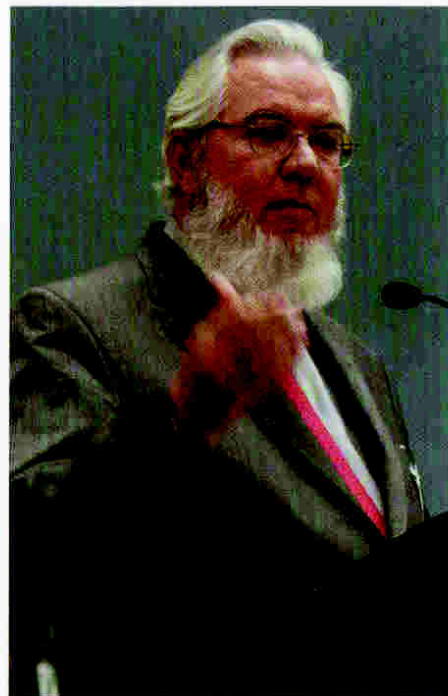
coyunturas precedentes, produjo importantes transformaciones políticas e ideológicas. En este nuevo contexto de crisis, en el que de nuevo se resignificaran las relaciones Estado-mercado-sociedad, se reconfigurara el Estado-nación para su retorno como agente de desarrollo, es mucho más imperante la conformación de sociedades más inclusivas, pluralistas y multiculturales.

Así pues, de manera de evitar catástrofes económicas, políticas o sociales en una región propensa a ellas, es necesario crear y fortalecer un espacio público compartido, ampliar la democracia y fortalecer la creatividad e innovación política, de manera de evitar las recetas locales autónomas o ensimismadas, debido al carácter global de la crisis y la profundidad de las vulnerabilidades estructurales. Asumir la magnitud del desafío que tiene la región por delante, con todas sus implicaciones políticas, económicas, institucionales y sociales, será la diferencia entre el desarrollo y la irrelevancia, entre la superación de la desigualdad y la postración o entre la democracia política y social plenas y las crisis recurrentes, esta vez y como en anteriores oportunidades, endógenas. ❁

NOS ENFRENTAMOS A LA peor crisis financiera y económica de carácter mundial desde la Gran Depresión de los años 1930. La situación es sin duda grave y continúa deteriorándose a un ritmo alarmante. En cuestión de meses, lo que parecía un problema exclusivo de unos pocos bancos ha conducido primero al colapso del sistema financiero de algunas regiones y luego a una desaceleración económica a nivel mundial. Hoy en día estamos frente a una crisis de la economía real que nos está conduciendo a una recesión social.

Pero no nos equivoquemos. El origen de esta crisis no yace sólo en la especulación financiera, sino en los desequilibrios estructurales del actual modelo de globalización. Me refiero a un modelo de globalización que durante las últimas tres décadas ha sobrevalorado el papel del mercado, devaluado el papel del Estado y menoscabado la dignidad del trabajo y el respecto por el medio ambiente.

Sabemos por experiencia que las graves crisis financieras provocan recesiones sumamente costosas en términos económicos, sociales y humanos. La actual crisis ha puesto en peligro, en tan sólo pocos meses, gran parte de los avances que el mundo ha realizado en los últimos 15 años en materia de reducción de la pobreza. La OIT calcula que el desempleo a nivel global aumentará en más de 50 millones



en 2009, superando por primera vez en la historia la barrera de los 200 millones de desempleados en todo el mundo. Se espera que el impacto sea mayor sobre las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes.

La crisis también está teniendo un fuerte impacto sobre los países en desarrollo, ya que la mayoría de ellos no cuenta con las mismas herramientas (margen fiscal, redes de contención social) que los países industrializados. Además, las naciones en desarrollo no sólo se ven golpeadas por un aumento del desempleo, sino también por un incremento de la pobreza laboral —trabajadores que ganan menos de dos dólares al día— y del empleo vulnerable,

ya sea trabajadores que contribuyen al sustento familiar y no perciben un salario o trabajadores por cuenta propia. La crisis está provocando un retroceso, o al menos un estancamiento, en la tendencia a la baja que estos dos últimos indicadores venían experimentando hasta 2007.

En el caso particular de América Latina, el último informe regional de la OIT señala que la tasa de desempleo urbano volverá a subir en 2009 tras cinco años de continua reducción. La disminución de los ingresos por exportaciones, producto de la caída en los precios internacionales de las materias primas, y el recorte en el envío de remesas también tendrán un impacto considerable en la región. Es alentador ver que varios países han comenzado a introducir planes anticrisis que ubican al empleo como un objetivo fundamental. Sin embargo, la región arrastra serios problemas estructurales —altos índices de pobreza, persistente desigualdad social, extensa informalidad económica y escasa protección social— que aún no encuentran solución.

Es alentador ver que la comunidad internacional ha comenzado a adoptar medidas para hacer frente a la crisis, tal como quedó demostrado en la última reunión del G20 en Londres. Sin embargo aún queda un largo camino por recorrer para lograr una respuesta que sea verdaderamente global y coordinada. La crisis ha dejado expuesto un vacío global de políticas y un vacío institucional. La OIT ha propuesto la creación de un Pacto Mundial para el Empleo que actúe como plataforma para la discusión,

coordinación e implementación de medidas a nivel local, regional y global. El pacto —y las respuestas de la OIT a la crisis— será uno de los principales temas de discusión durante la Conferencia Internacional del Trabajo de este año.

Ha llegado el momento de adoptar medidas audaces, que ubiquen a la generación de empleo, las empresas sostenibles y la protección social como ejes centrales de la recuperación económica. Un estudio reciente de la OIT sobre las medidas anticrisis que se están implementando en más de 40 países —incluyendo todos los integrantes del G20— muestra que los paquetes de estímulo destinados a la economía real son, en promedio, cinco veces menores a aquéllos centrados en el sistema financiero. El informe muestra además que los paquetes de estímulo no les otorgan la debida atención a los grupos más vulnerables ni reconocen el papel crucial que cumple el diálogo social en momentos de crisis.

Pero insisto: había una crisis antes de la crisis. Ninguna medida a corto plazo será suficiente si no corregimos el rumbo a largo plazo. Debemos orientar la economía mundial hacia un desarrollo social, económico y medioambiental sostenible, fundado en inversiones productivas, en energías renovables y políticas de protección social y trabajo decente. Y cuyo eje central sean las personas.

La OIT fue creada en 1919 sobre la convicción primordial de que la « paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social». Desde entonces, el mundo y la OIT han atravesado tiempos de guerra y de paz, de depresión y de crecimiento económico, de triunfos y derrotas, pero este precepto sigue siendo hoy tan válido y fundamental como hace noventa años.

Si durante las últimas tres décadas los países hubiesen invertido más en empleo de calidad, profundizado la protección social, promovido el diálogo social y fomentado los derechos de los trabajadores —lo que en la OIT denominamos Trabajo Decente—, en vez de confiar el rumbo de la globalización exclusivamente a los dictados del mercado, entonces no me cabe duda de que hoy en día no estaríamos ante un panorama tan alarmante. No digo esto con desesperanza, alarmismo ni frustración, sino con la firme convicción de que el mundo unido y movilizado puede revertir esta tendencia. ■

Mensaje del Presidente de la Quinta Cumbre de las Américas, el Honorable Patrick Manning, Primer Ministro de la República de Trinidad y Tobago
19 de abril de 2009

Como presidente de la Quinta Cumbre de las Américas, debo decir que me complace la forma en que las deliberaciones progresaron ayer en las sesiones plenarias y esta mañana en las reuniones de los líderes. Desde que asumí el liderazgo del proceso de cumbres de las Américas, Trinidad y Tobago ha reclamado una mayor cooperación, integración y solidaridad entre nuestras naciones como el principal vehículo para asegurar la paz, la seguridad y la prosperidad de todos los pueblos de las Américas. Esta Cumbre constituye un acontecimiento histórico para Trinidad y Tobago y para la región de la CARICOM, y ha excedido ampliamente nuestras expectativas.

La Cumbre de Puerto España se ha caracterizado por el respeto mutuo y el anhelo y el genuino deseo de trabajar conjuntamente en la solución de los numerosos desafíos que enfrenta el hemisferio. Varios dirigentes expresaron el punto de vista de que Puerto España marca un punto de inflexión en las relaciones interamericanas y en la constitución de una comunidad más vigorosa de naciones.

América Latina y el Caribe se hallan ahora en una encrucijada diferente en sus relaciones mutuas y con los Estados Unidos de América. Al modificarse el panorama político, las relaciones han cambiado como consecuencia de una posición totalmente distinta basada en el respeto mutuo y en la igualdad. Los líderes del hemisferio concordaron en que hoy día tenemos una real oportunidad de llevar las relaciones interamericanas a un nuevo nivel en el que todos los países, grandes o pequeños, desarrollados o en desarrollo, se encuentren en un pie de igualdad. Tales relaciones deben basarse en una nueva visión y una estrategia de desarrollo centrada en la gente.

Las deliberaciones del día y medio transcurrido se han centrado en los tres principales pilares de la Declaración de Compromiso de Puerto España: prosperidad humana, seguridad energética y sostenibilidad ambiental.

El debate también se concentró en la reintegración de Cuba al sistema interamericano, y en la formulación de respuestas relevantes a la actual crisis financiera mundial.

Reintegración de Cuba al sistema interamericano

Varios presidentes y primeros ministros reclamaron el fin de la exclusión de Cuba del proceso de las Cumbres y el sistema interamericano. Hubo un claro consenso en que la reintegración de Cuba en las relaciones interamericanas constituye un paso esencial para una mayor cohesión e integración en las Américas. La posición muy abierta y conciliatoria del Presidente Obama y otros líderes ha incrementado el optimismo en una plena participación de Cuba en los asuntos hemisféricos en un futuro no demasiado distante. El gobierno de Trinidad y Tobago espera con interés el día en que Cuba sea acogida plenamente en la familia interamericana.

Crisis financiera mundial

En el momento de celebrarse esta Quinta Cumbre, la economía mundial enfrenta una severa crisis que ha conducido a una difundida contracción económica mundial. Las estadísticas económicas dadas a conocer por el Fondo Monetario Internacional en enero de 2009 indican que la economía mundial creció sólo un 0,5 por ciento en 2008 y se prevé que en 2009, por primera vez en sesenta años, el crecimiento será negativo.

Si bien en 2008 las economías del hemisferio occidental experimentaron en promedio un crecimiento del 4,8 por ciento, se prevé que en 2009 el crecimiento económico se desacelerará marcadamente a alrededor del 1 por ciento.

Los países de las Américas enfrentan ahora una contracción mayor que la anticipada en los precios y el volumen de sus

exportaciones, restricciones en el acceso al financiamiento comercial, dificultades en acceder a otros tipos de financiamiento externo y menores remesas de los trabajadores migrantes. La actual contracción económica ha deprimido los precios de los productos básicos, limitado el crecimiento de la inversión, debilitado los mercados laborales y disminuido la confianza de los empresarios y los consumidores.

Tampoco son inmunes a las consecuencias sociales negativas de la actual crisis mundial, que está amenazando acabar con los adelantos arduamente alcanzados las últimas dos décadas. Es probable que dichas consecuencias sean bastante significativas. Muchas personas están perdiendo sus empleos y volviendo a hundirse en la pobreza.

El impacto ha sido más pronunciado en las economías más pequeñas. Una crisis prolongada originará severas dificultades sociales y económicas en esas economías vulnerables, que pueden sacarlas del camino a un desarrollo sostenible que han procurado mantener con tanto esfuerzo.

En el contexto de la actual desaceleración económica, el retorno al desarrollo sostenible de todos los pueblos de las Américas requiere concentrarse nuevamente en los compromisos de la Declaración de Doha, la Declaración del Milenio, el Consenso de Monterrey y la Cumbre Mundial de 2005.

Muchos países han adoptado diversas medidas para mitigar el impacto de la crisis y mantener la estabilidad macroeconómica, incluso aplicando planes de estímulo fiscal, recortes de impuestos, apoyo a la liquidez de los mercados financieros y reducción de las tasas de interés. Sin embargo, es preciso manejar cuidadosamente el apoyo fiscal con el objeto de no limitar el espacio fiscal. Ahora resulta esencial armonizar las políticas monetarias y fiscales.

Además de los esfuerzos individuales, la crisis requiere una respuesta global concertada y coordinada. Probablemente la acción unilateral no resulte eficaz. Es preciso aumentar los lazos económicos y comerciales entre los países de las Américas y



restablecer los flujos crediticios con el objeto de financiar el comercio internacional y detener una abrupta declinación de las exportaciones.

Los países desarrollados también tienen un importante papel que cumplir abordando las debilidades de sus sistemas financieros y restableciendo la confianza en los mercados.

La decisión adoptada por la recientemente concluida Cumbre de Londres, de asignar 1,1 billones de dólares en nuevos recursos a través de las instituciones financieras internacionales para restablecer el crédito, estimular el comercio y respaldar el empleo y el crecimiento en la economía mundial constituye un paso en la dirección correcta. Estas medidas deben implementarse lo antes posible. Si bien la asignación de recursos al FMI es un paso positivo, es sólo una medida básica. También debe asignarse prioridad a la revisión de los requisitos de capital de las otras instituciones multilaterales y respaldar las diversas medidas de estímulo de la liquidez.

El Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras deben aprovechar sus respectivas ventajas competitivas y sus recursos financieros para cumplir en forma más agresiva sus mandatos en materia de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. Los dirigentes asignaron a la recapitalización del Banco Interamericano de Desarrollo un importante lugar en el programa de acción inmediata.

El reconocimiento de la dimensión humana de la crisis y la posibilidad de incluir consideraciones ambientales en los

planes de estímulo fiscal muestra que los líderes de la Cumbre de Londres del G20, a pesar de las urgentes demandas a corto plazo, no han olvidado las consecuencias de largo plazo. Constituye una señal positiva el hecho de que, en medio de la perturbación económica actual, se ha reafirmado el compromiso de enfrentar el desafío del cambio climático y sus consecuencias irreversibles.

Todos los gobiernos tienen un importante papel que desempeñar en el que hoy es un sistema financiero y económico mundial interdependiente y deben implementar estructuras regulatorias robustas y eficaces para estimular la estabilidad de los sistemas financieros nacionales y regionales.

Asimismo se requiere una mayor participación de los países emergentes y más pequeños del hemisferio occidental en la modernización de las estructuras, mercados y sistemas regulatorios globales con el objeto de prevenir futuras crisis financieras. Los países pequeños tienen un interés legítimo en la exportación de servicios internacionales responsables, transparentes y a la vez competitivos.

En la medida de lo posible, los esfuerzos de estímulo deben respaldar un crecimiento y un desarrollo económico sostenibles para promover la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.

Declaración de Compromiso de Puerto España

La Declaración de Compromiso de Puerto España, que es el documento negociado durante los últimos seis meses por 34 países, contiene las medidas que deben adoptarse al nivel técnico para asegurar el

futuro de nuestros ciudadanos. La Declaración hace amplia referencia a la crisis financiera y como tal, no aborda en detalle las medidas específicas que deben implementarse. El tema de la crisis económica debe abordarse en forma muy cuidadosa, y los ministros de hacienda del hemisferio occidental, que se reunirán en Chile en el mes de julio, deberán examinarla en mayor detalle, teniendo en cuenta los resultados de la reunión de Londres del G20, y definir con claridad las medidas prácticas que deberán tomar todos los países.

Durante la reunión de los líderes se llegó al acuerdo de que el presidente de la Quinta Cumbre de las Américas firmara la declaración como adoptada por todos los jefes de Estado y de gobierno que asistieron a la Cumbre.

Si bien algunos países expresaron reservas sobre determinados aspectos de la Declaración, los líderes querían enviar una clara señal de solidaridad y cooperación. La visión colectiva fue que la Quinta Cumbre fue un notable éxito, caracterizada por un singular espíritu de apertura y buena voluntad, y que anuncia el comienzo de una nueva era en las relaciones interamericanas.

Haití

En el mismo espíritu de cooperación, los líderes reiteraron su compromiso de respaldar a Haití y acordaron que el tema de financiar los programas de desarrollo serían considerados en la Asamblea General de la OEA que se celebrará en junio en San Pedro Sula, en Honduras.

✍

Mensaje del Primer Ministro del Reino Unido durante la conferencia de prensa del G20 2 de abril de 2009

¿Puedo darles la bienvenida a esta conferencia después de nuestra Cumbre del G20? Este es el día el que el mundo se unió para luchar contra la recesión mundial, no con palabras sino con un plan de reforma y de recuperación global y con un claro cronograma de ejecución. Nuestro mensaje de hoy es claro e inequívoco: creemos que en esta nueva era global nuestra prosperidad es indivisible. Creemos que los problemas mundiales requieren soluciones globales. Creemos que para que el crecimiento sea sostenido debe ser compartido y que el comercio debe volver a ser el motor del crecimiento.

El viejo consenso de Washington es algo del pasado. Hoy hemos llegado a un nuevo consenso: que tomamos medidas en conjunto para abordar los problemas que enfrentamos; que haremos lo que sea necesario para restablecer el crecimiento y el empleo; que tomaremos medidas esenciales para recobrar la confianza en nuestro sistema financiero y para impedir que vuelva a ocurrir una crisis como ésta.

No existen soluciones fáciles, pero con los seis compromisos que asumimos hoy podemos acortar la recesión y salvar empleos.

En primer lugar, por primera vez nos hemos reunido para fijar principios destinados a reformar el sistema bancario mundial. Es un programa integral de medidas que incluye por primera vez comprender el sistema bancario paralelo, incluidos los fondos especulativos, dentro de la red reglamentaria global. Hemos acordado que será preciso fijar normas contables internacionales. Regularemos los organismos de clasificación crediticia para eliminar sus conflictos de intereses. Hemos acordado que terminarán los paraísos tributarios que no transfieren información. Debe terminar el secreto bancario del pasado.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos está publicando esta tarde una lista de paraísos tributarios que no cumplen con las normas establecidas y con respecto a los que deben adoptarse medidas inmediatas, y hemos acordado la adopción de estrictas normas y sanciones para quienes no cumplan en el futuro.

Creemos una nueva junta de estabilidad financiera que asegure la cooperación a través de las fronteras, que identifique riesgos a la economía y junto con el Fondo Monetario Internacional proporcione el mecanismo de alerta temprana que esta nueva economía global necesita.

Completaremos la implementación de colegios internacionales de supervisores de instituciones financieras y pondremos en práctica nuevas normas sobre pagos y bonos a un nivel global que reflejen los resultados reales, eliminando las recompensas por el fracaso. Queremos estimular la responsabilidad empresarial en todas partes del mundo.

En segundo lugar, limpiaremos los bancos para que puedan incrementar los préstamos a familias y empresas y para permitir eso hemos acordado por primera vez un enfoque global común sobre la forma de encarar los activos deteriorados o tóxicos.

En tercer lugar, hemos convenido hacer todo lo que sea necesario para restablecer el crecimiento y acelerar la recuperación. Desde nuestra última reunión en Washington y como parte de este proceso, los países del G-20 han anunciado y están implementando el mayor estímulo macroeconómico que se haya aplicado en el mundo. Nos hallamos en medio de una expansión fiscal sin precedentes que para fines del próximo año ascenderá a una inyección de 5 billones de dólares en nuestras economías y que salvará o creará millones de empleos en un período en que debemos combatir el desempleo.

Además de espectaculares cortes de intereses, nuestros bancos centrales se han comprometido a mantener políticas

expansionistas, como declaramos en el comunicado, todas las políticas expansionistas que sean necesarias, utilizando la gama completa de opciones disponibles.

También hemos acordado hoy recursos adicionales por un billón de dólares, que se inyectarán a la economía mundial a través del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones. Ello incluirá 250.000 millones de dólares de derechos especiales de giro, la moneda de reserva del FMI, que se emitirán a países que forman parte del Fondo. Estos recursos están disponibles a todos los miembros del FMI, y al mismo tiempo hemos triplicado los recursos del Fondo Monetario Internacional con 500.000 millones adicionales.

En su conjunto, estas medidas nos proporcionan la confianza de que la economía mundial podrá retornar al crecimiento incluso más rápidamente de lo que el Fondo predice en la actualidad. Hoy hemos solicitado al Fondo Monetario Internacional que controle el progreso hacia el logro de este objetivo e informe sobre otras medidas que sean necesarias.

En cuarto lugar, junto con estos recursos adicionales solicitaremos a las instituciones internacionales que fortalezcan su supervisión de la economía mundial y promuevan el crecimiento y la reducción de la pobreza. Hemos acordado que los mandatos de estas instituciones creadas en 1945 deben ahora reformarse y hacerse más responsables, representativos y eficaces, y ello incluye dotar a los mercados emergentes y los países en desarrollo una mayor voz y una mayor representación. Y también permitiremos que los dirigentes y el personal superior de dichas instituciones sean nombrados de acuerdo a sus méritos.

En quinto lugar, actuaremos en forma decisiva para estimular el comercio internacional. El comercio constituye un motor crucial de crecimiento de la economía mundial. Hemos acordado trabajar urgentemente con los demás líderes discutiendo, reuniéndonos y preparando la conclusión de la ronda de negociaciones de Doha, lo que tiene el potencial de estimular sustancialmente la economía mundial.



Con el objeto de abordar lo que es un sustancial déficit en el financiamiento del comercio—el 90 por ciento de todo el comercio depende de este financiamiento—hemos acordado hoy poner a disposición no los 100.000 millones de dólares originalmente previstos, sino 250.000 millones de dólares para financiamiento del comercio. Ello se proveerá en los próximos dos años a través de nuestros organismos de exportación, crédito e inversión y de los bancos multilaterales de desarrollo, e incluirá 50.000 millones de dólares a través del nuevo programa que está estableciendo el Banco Mundial.

También procuraremos que la economía mundial sea más justa y sostenible. Estos momentos de crisis financiera no son momentos de renunciar a nuestros compromisos en favor de los más pobres del mundo. Cuando la gente está sufriendo y tenemos la capacidad de ayudar, no dejaremos de hacerlo. Mantenemos nuestro firme compromiso de cumplir nuestros Objetivos de Desarrollo del Milenio y nuestro compromiso de ayuda, y para enfrentar la crisis de los países más pobres,

hemos solicitado al Fondo Monetario Internacional que formule propuestas para emplear el resultado de las ventas acordadas de oro para respaldar a los países de bajos ingresos. En total, hemos convenido canalizar 50.000 millones de dólares a los países más pobres junto con un fondo de vulnerabilidad del Banco Mundial.

Al movilizar las economías mundiales para luchar contra la recesión estamos dispuestos a aprovechar la oportunidad de nuestros programas de estímulo, promover un bajo crecimiento del carbón, y crear los empleos verdes de los que depende nuestra futura prosperidad. Y nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente en un acuerdo para un régimen sobre el cambio climático después de 2012 en la conferencia de Copenhague. Hemos solicitado asimismo a los ministros de hacienda que completen las reformas de los sistemas reglamentarios, reuniéndonos nuevamente este año para verificar los progresos alcanzados.

Cuando ocurrió la crisis de Wall Street en 1929, se requirieron quince años para que el mundo reconstruyera y renovara nuestras economías. Esta vez estamos de acuerdo en que se trata de algo diferente. No habremos de titubear cuando la gente está perdiendo sus empleos y sus hogares, en hacer lo que podamos para mejorar su prosperidad.

Por supuesto, las decisiones adoptadas hoy no resolverán la crisis en forma inmediata, pero hemos iniciado el proceso que permitirá resolverla. Hace unos años no se hubieran realizado reuniones como ésta, que involucran a tantos países de diversos continentes, y mucho menos se habría logrado acuerdo entre ellos. Pero hoy los países más grandes del mundo han acordado un plan global de recuperación y reforma, que comprende los mayores recortes de intereses de la historia, el más voluminoso paquete de estímulo fiscal que jamás hayamos visto, el mayor incremento de recursos de nuestras instituciones, y 250.000 millones de dólares para financiamiento del comercio.

Por primera vez hemos adoptado un enfoque común para limpiar los balances de los bancos y restablecer los préstamos. Estamos embarcados en un profundo proceso de reforma y reestructuración de nuestro sistema financiero internacional para ahora y para el futuro, y hemos mantenido nuestro compromiso de ayudar a los países más pobres del mundo, para lo que hemos asignado los recursos necesarios, así como para una recuperación verde. No se trata de un simple conjunto de medidas: es una acción colectiva que pone de relieve lo mejor de nuestros esfuerzos.

Creo que está surgiendo un nuevo orden mundial y con él el fundamento de una nueva y progresista era de cooperación internacional. Hemos decidido que desde hoy administraremos en forma conjunta el proceso de globalización asegurando responsabilidad y justicia para todos, y al hacerlo consolidaremos una sociedad mundial más sostenible, más abierta y más justa. ✱

XXXIX ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA: HACIA UNA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA

por Albert R. Ramdín

Secretario General Adjunto, Organización de los Estados Americanos



ARCHIVOS DE LA OEA/JUAN MANUEL HERRERA

Al acercarse la XXXIX Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, Honduras, quizá resulte oportuno reflexionar sobre los cambios económicos, ambientales y políticos que afectan a nuestra región, y su impacto sobre la seguridad de los ciudadanos de las Américas. Uno de los aspectos más críticos que enfrentamos actualmente en el hemisferio es el incremento de los niveles de violencia y delincuencia y sus consiguientes consecuencias sobre el desarrollo social, económico, político y cultural de los pueblos de las Américas.

La violencia se ha convertido en uno de los aspectos del desarrollo que requiere más urgente solución en la agenda global. Los estudios del Banco Mundial han mostrado que en los últimos diez años, en alrededor de sesenta países la violencia ha reducido directa y significativamente el desarrollo económico. En América Latina y el Caribe, ha obstaculizado los esfuerzos de reducción de la pobreza y ha limitado el progreso en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La criminalidad y la violencia guardan una significativa relación con la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la educación. Por lo tanto, reviste crítica importancia abordar no solamente los síntomas de la pobreza, la criminalidad y la violencia, sino analizar y estudiar las causas estructurales de estos problemas.

Asegurar la democracia en la actualidad requiere un enfoque integral que asigne una decidida importancia al desarrollo social y económico en nuestras agendas de seguridad. Ciertamente, los países del hemisferio occidental aprecian los efectos directos e indirectos de la violencia sobre el bienestar humano a corto plazo y sus implicaciones de largo plazo sobre el desarrollo económico, la gobernabilidad democrática y el desarrollo social.

En Centroamérica y el Caribe, la creciente incidencia de la violencia y las actividades delictivas, junto con el impacto transnacional de las pandillas y otras formas de violencia urbana, están poniendo a prueba la capacidad de las instituciones democráticas en toda la región. La violencia juvenil se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales de los gobiernos y sociedades de la subregión. Los responsables de la formulación de políticas y la comunidad internacional han comenzado a considerar la idea de la «ecología social» de la violencia, que sostiene que la violencia no puede comprenderse cabalmente, y mucho menos resolverse, sin abordar directamente las causas de la violencia dentro de las sociedades, incluidos los conflictos económicos, étnicos, culturales y de género, entre muchos otros, que con frecuencia constituyen la base de los más serios casos de violencia y criminalidad que enfrentamos en la actualidad. Estas fuentes incluyen una serie de factores de riesgo como la

falta de oportunidades económicas y el acceso a servicios de apoyo, normas sociales y creencias sobre la violencia; representaciones de la violencia por parte de los medios de comunicación, las divisiones sociales y la disponibilidad de armas y drogas y alcohol, entre otras muchas.

En la última década se han experimentado cambios significativos en la naturaleza, el alcance y la intensidad de la delincuencia organizada transnacional en nuestra región. Los grupos criminales han establecido células o redes mejor estructuradas, aumentando al mismo tiempo la sofisticación de las actividades delictivas y el alcance de sus operaciones. Las estadísticas recientes indican que América Latina y el Caribe, con sólo el 9 por ciento de la población mundial, muestran el 27 por ciento de los homicidios globales, alrededor de 140.000 por año.

Ante esta realidad, no me sorprende que nuestros 34 Estados Miembros hayan concebido la idea de formar un consenso sobre la necesidad de promover una cultura de no violencia y de paz como valor fundamental para consolidar la gobernabilidad democrática en el hemisferio. Corresponde que la Declaración de San Pedro Sula reconozca la importancia de promover y fortalecer una cultura de paz y no violencia en nuestras sociedades, responsabilidad que deben compartir los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.

La redefinición de la seguridad en el hemisferio de un enfoque tradicional a un enfoque multidimensional ha permitido a la Secretaría General de la OEA responder a los crecientes problemas de seguridad y violencia en forma multifacética. Desde modificar las asociaciones (incluso el Colegio Interamericano de Defensa) para responder a las preocupaciones sobre seguridad de los 34 Estados Miembros hasta la formulación de programas de educación para la democracia y la paz, la OEA se ha convertido en un participante clave en la promoción de la cultura de la no violencia y la paz en el sistema interamericano.


Al nivel político, la prioridad y la importancia de la seguridad se planteó al nivel más alto en la Primera Reunión de Ministros Responsables de la Seguridad Pública en las Américas, que se celebró en México el año pasado. Por primera vez, la OEA pudo convocar a los 34 Estados Miembros sobre un tema que afecta a la totalidad del hemisferio. Esta reunión marcó un hito crítico al nivel interamericano, ya que facilitó la oportunidad de poner de relieve la atención, la acción y un consenso sobre un hecho tan relevante como la seguridad pública. En esta reunión, los participantes reconocieron que las condiciones de seguridad pública han mejorado mediante el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a través de la protección de la educación, la salud y el desarrollo económico y social.

Todos estos mandatos son esenciales para la OEA en la medida en que la comunidad internacional procura convergir a los diversos niveles para implementar soluciones transregionales a la amplia gama de problemas de seguridad que afectan a nuestras sociedades.

Un cultura de paz y no violencia deben formar parte del marco global de desarrollo y democracia. Nuestras iniciativas y medidas en materia de fortalecimiento de la democracia y la promoción de la paz, para ser efectivas, deben centrarse en la gente y orientarse hacia la creación de un clima seguro y estable que favorezca el crecimiento y el desarrollo económico y social. La introducción de una cultura de no violencia, paz y tolerancia en nuestras sociedades debe ser un proceso continuo, que involucre la resolución de conflictos, habilidad para la mediación y el diálogo, y educación cívica. La educación para la democracia debe ser una parte intrínseca de nuestros programas académicos nacionales, no sólo para facilitar una mejor comprensión y comunicación entre las distintas comunidades y asegurar el respeto y la aceptación de las normas y valores de otras culturas, sino para comenzar a formar la nueva generación de líderes democráticos.

En la enreujada de una nueva agenda hemisférica, la promoción de la cultura de la no violencia y la paz resulta crítica. Ello requerirá medidas concretas para empoderar a nuestros ciudadanos, formar capacidad humana a través de la educación, la innovación y políticas de inclusión que contribuyan al bienestar económico y social de nuestras sociedades.

A medida que nuestras preocupaciones de seguridad se tornan más urgentes, resulta vital que los países del hemisferio occidental forjen marcos bilaterales y subregionales más fuertes y eficaces. Los organismos multilaterales como la OEA pueden desempeñar un importante papel facilitando la coordinación de políticas y acciones entre los gobiernos de los Estados Miembros y en las distintas subregiones.

Los temas a considerarse en la próxima Asamblea General marcan un importante punto de inflexión en el compromiso compartido de nuestra región en la promoción de una cultura de no violencia en nuestras sociedades. 

En 2009 la CIDH cumple sus cincuenta años de existencia. La decisión de su creación fue adoptada durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile del 12 al 18 de agosto de 1959. • En el Acta Final de esta reunión, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos señalaban que «la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la persona humana». El 18 de agosto de 1959, la Quinta Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores resolvió «crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se compondrá de siete miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, encargada de promover el respeto de tales derechos, la cual será organizada por el mismo Consejo y tendrá las atribuciones específicas que éste le señale». Nació así la CIDH, con la misión de supervisar el cumplimiento de los Estados Miembros de la OEA con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que había sido adoptada en 1948. En aquella reunión de 1959 en Chile, los Estados también expresaron que estaba «preparado el ambiente en el hemisferio para que se celebre una Convención».

La Organización de los Estados Americanos continúa su compromiso en favor del reconocimiento de la dignidad a través de la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

EN DEFENSA DE LOS

Derechos humanos



La decisión de crear una Comisión Interamericana y de encargar la redacción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos hizo que aquella reunión pasara a la historia como un hito hemisférico fundamental en la tarea de proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes de las Américas. Pero es necesario recordar que esa reunión fue un paso importante de un proceso que había dado inicio años antes, cuando la humanidad en su conjunto buscaba la manera de evitar que se repitiera una tragedia como la Segunda Guerra Mundial.

La búsqueda de respuestas a la Segunda Guerra Mundial llevó a la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya Carta fundacional establece que los pueblos de las Naciones Unidas están «resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y

pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional».

En aquel momento histórico comenzó una etapa de búsqueda y creación de sistemas de protección de los derechos humanos en el plano internacional, basado en el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos. Este proceso, en el cual la región latinoamericana tuvo un papel protagónico y muy activo, llevó a la sanción de varios instrumentos de derechos humanos tanto a escala universal como regional.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en mayo de 1948 en Bogotá, fue la primera de su tipo en el mundo. Fue gestada en un proceso marcado por un profundo sentido democrático y por el reconocimiento de los derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— como integrales a la dignidad de todo ser humano. La Carta de la OEA está indudablemente imbuida del espíritu de democracia y derechos humanos que pone al ser humano como eje central del



esfuerzo conjunto y la cooperación a que se comprometieron los países del hemisferio.

En estos cincuenta años, la CIDH ha recorrido un largo camino, orientado siempre a buscar las mejores formas de defender y proteger los derechos humanos de los habitantes de las Américas. En sus primeras dos décadas de vida, en una región latinoamericana marcada por la inestabilidad democrática y dictaduras en varios países, la CIDH se caracterizó por la realización de visitas y la preparación de informes denunciando las graves violaciones a los derechos humanos en varios



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató evidencias del poder destructivo de la contienda civil sobre la vida rural durante una visita realizada a Colombia en 2003, página de enfrente. En 1979, la Comisión visitó presos políticos en la cárcel de Villa Devoto, en la Argentina, centro. La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en 1959 en Santiago, Chile, arriba, creó por resolución la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

por Santiago Canton

EN DEFENSA DE LOS Derechos humanos



para avanzar en la protección de los derechos humanos y de denunciar cuando se cometen violaciones.

Asimismo, desde sus primeros años de existencia la CIDH comenzó a recibir denuncias de miles de habitantes de las Américas que consideraban que sus derechos humanos habían sido violados por los Estados. Este mandato se ha fortalecido sustancialmente en las últimas décadas, permitiendo que las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana sean actores principales en la solución de violaciones a los derechos humanos y en la creación de estándares interamericanos para la protección de los derechos de las personas.

países de la región. Hoy en día, con el triunfo de la democracia, las visitas de la Comisión continúan siendo un instrumento esencial en la protección y promoción de los derechos humanos. Los informes de las visitas ofrecen a los gobiernos un insumo valioso para diseñar sus agendas de derechos humanos, al mismo tiempo que le otorga a la sociedad civil la información necesaria para que continúe con la tarea fundamental de cooperar con los gobiernos

Son numerosos los casos que han permitido realizar reformas estructurales dentro de los Estados, facilitándose sustancialmente la defensa y protección de los derechos humanos de millones de habitantes. Las normas y la jurisprudencia del sistema son esenciales en la formulación de leyes y políticas públicas, y son citadas frecuentemente por los tribunales nacionales como fuente de obligación internacional. Algunos pocos ejemplos permiten medir la magnitud de los aportes de la Comisión.

LA CARTA DE LA OEA ESTÁ INDUDABLEMENTE IMBUIDA DEL ESPÍRITU DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS QUE PONE AL SER HUMANO COMO EJE CENTRAL DEL ESFUERZO CONJUNTO Y LA COOPERACIÓN A QUE SE COMPROMETIERON LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO



Las visitas a cárceles y obtención de testimonios de personas privadas de la libertad es parte esencial de la tarea que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, página de enfrente. Durante una visita realizada recientemente a Jamaica, la Comisión observó las condiciones en centros de detención en Spanish Town, arriba izquierda. Los comisionados han recibido y procesado cientos de casos de desapariciones. Afiches colocados en las calles de Santiago de Chile, arriba derecha, reclaman saber la verdad y encontrar los restos de los desaparecidos. El Dr. Adolfo Pérez Esquivel, cuarto desde la izquierda en la fotografía superior, que acababa de recibir el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos, se dirige a la Comisión durante una reunión celebrada en Washington en 1980

En 1992, la CIDH decidió en tres casos que las leyes de amnistía sancionadas para evitar que los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas fueran enjuiciados, eran una violación de la Declaración y de la Convención Americanas y debían quedar sin efecto. Estas decisiones, las primeras en su tipo a nivel universal, fueron luego ratificadas en otro caso decidido en 2001 por la Corte Interamericana. Estas decisiones abrieron el camino para que en algunos países se hayan derogado estas leyes, y se termine con la impunidad para las graves violaciones del pasado.

EN DEFENSA DE LOS Derechos humanos

La Comisión ha realizado visitas in loco a la mayoría de los Estados Miembros de la OEA, recientemente al Chaco paraguayo, derecha, y al Chaco boliviano, página de enfrente abajo. La CIDH visitó a los prisioneros de una cárcel nicaragüense durante el gobierno de Somoza en 1978, página de enfrente arriba



Otro aporte esencial de la CIDH es el relacionado con la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas leyes que penalizan las expresiones críticas a los funcionarios públicos fueron declaradas violatorias de la Convención Americana y se recomendó a todos los Estados su derogación. Hoy en día, más de una decena de países de la región han derogado dichas leyes.

Estos son sólo dos ejemplos de cómo las decisiones de la CIDH han sido centrales en el fortalecimiento del estado de derecho en la región. En un caso, contribuyendo a que se ponga fin a la impunidad de aquellas personas que atacaron la democracia y cometieron graves violaciones a los derechos de millones de personas; en otro caso, evitando que se silencie la crítica a nuestros gobernantes.

La CIDH, a través de sus recomendaciones en casos o informes, ha facilitado que se deroguen o sancionen

leyes y políticas públicas a fin de garantizar una mejor protección de los derechos de las mujeres, terminar con la censura previa, fortalecer el debido proceso, garantizar el derecho a un juez natural, fortalecer la participación política de los habitantes, garantizar los derechos de los pueblos indígenas, garantizar la igualdad a grupos vulnerables, respetar los derechos de los trabajadores, entre otros objetivos y logros. Estos ejemplos permiten apreciar cómo en estos cincuenta años la CIDH ha contribuido no sólo en la resolución de violaciones individuales, sino también en construir el Estado de derecho en la región, para prevenir violaciones a los derechos humanos, ya sean masivas y sistemáticas o individuales.

Que haya sido posible realizar esta tarea se debe a la combinación de dos factores: Estado y sociedad civil. La constante colaboración entre Estados, sociedad civil, Comisión y Corte Interamericana es el eje principal en el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos.

En estos cincuenta años, la relevancia de los importantes logros alcanzados debe contraponerse a los desafíos pendientes que caracterizan al sistema. La esencia progresista de los derechos humanos nos obliga a que nos enfoquemos en el camino a recorrer, y no en el recorrido. Los desafíos existentes son innumerables; la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia doméstica, la falta de acceso a la salud y a la educación, son sólo el comienzo de una lista que debe formar parte de la agenda de todos nosotros.

Debemos reflexionar sobre los logros alcanzados en estos cincuenta años para mejorar en la búsqueda de soluciones a los desafíos pendientes. La experiencia de estas cinco décadas nos enseña que es posible hacerlo. Depende de todos nosotros. Comencemos hoy. ✻

Santiago Canton es Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las fotografías son cortesía de la CIDH.



LA CONSTANTE COLABORACIÓN ENTRE ESTADOS, SOCIEDAD CIVIL, COMISIÓN
Y CORTE INTERAMERICANA ES EL EJE PRINCIPAL EN EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS



En el verano de 1968, los estudiantes activistas mexicanos emitieron sus primeros llamados en favor de la democracia. El 13 de agosto de 1968, en una demostración masiva realizada en la plaza principal de la ciudad de México, Fausto Trejo, de la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior pro Libertades Democráticas, manifestó que «este movimiento exige el respeto por la Constitución y las libertades democráticas». Fue una de las primeras referencias explícitas y directas del movimiento.

Las protestas crecieron ese verano, y las fuerzas de seguridad ocuparon el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los estudiantes fueron rodeados, golpeados y arrestados. Para el 2 de octubre, diez días antes de las Olimpiadas que se celebraron en 1968 en México, decenas de miles se habían reunido en una manifestación de protesta en la Plaza de Tlatelolco. El gobierno respondió disparando contra la multitud, matando cientos, y posiblemente miles, de

personas. Su número aún se halla en discusión. A este episodio siguió una «guerra sucia» en la que los disidentes fueron rodeados, desaparecidos y encarcelados.

Durante los siguientes cuarenta años, ex estudiantes y maestros que habían formado el Consejo Nacional de Huelga (CNH) durante el movimiento de 1968 comenzaron a formalizar un proyecto de

derechos humanos y democracia que con el tiempo se transformó en el Comité 68. Mientras tanto, los activistas continuaron conmemorando la masacre mediante marchas, publicaciones y conferencias. Durante los años setenta, el CNH exigió la liberación de presos políticos y procuró transformar el sistema de gobierno de las universidades. Los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría y José López

Portillo respondieron a esas exigencias liberando presos, proporcionando un mayor acceso al financiamiento de la educación y la investigación, y ofreciendo cargos gubernamentales a muchos ex militantes. Al mismo tiempo, los activistas también fundaron periódicos y publicaciones que se convirtieron en una voz clave de la oposición. En 1988, muchos mexicanos respaldaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia, mientras otros se alinearon con Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo había desaparecido durante la guerra sucia. Los alegatos de fraude en las elecciones de 1988 hicieron que los activistas buscaran una mayor transparencia y reforma democrática. En 1994 se formó una Comisión de la Verdad, constituida por activistas, intelectuales y artistas. En 2001, estos acontecimientos llevaron finalmente a la desclasificación de documentos relacionados con los sucesos de 1968, que ahora se encuentran en el Archivo Nacional de



Memoria y Democracia

la ciudad de México. Para el trigésimo aniversario del movimiento de 1968, el Comité 68-98 constituyó una organización formal y comenzó a exigir justicia por los crímenes cometidos a fines de los años sesenta y principios de los setenta.

Cuando Vicente Fox fue elegido presidente en 2000, el Comité se había convertido en una asociación cívica como estrategia para continuar su acción política y legal. Sus principales miembros son Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero, Félix Hernández Gamundi, César Tirado, Piñero Guzmán, Vázquez Camarena y Javier Ramos Rodríguez. Todos ellos han desempeñado un importante papel en el juicio entablado contra el ex presidente Echeverría y otros funcionarios gubernamentales. Con el fin de llevar a cabo tales acciones y mantener viva la memoria, el Comité comenzó a documentar la violencia y crear una memoria colectiva nacional como en Argentina, Brasil y Chile. Como parte de este esfuerzo por promover una reforma democrática, el Comité demandó que la masacre de civiles perpetrada por el gobierno fuera incluida en los textos de historia y que fuera reconocida en espacios públicos como el recientemente inaugurado Centro Cultural Universitario

En el otoño de 1968, un Consejo Nacional de Huelga dirigido por estudiantes realizó una gran manifestación de protesta que reunió a medio millón de personas en la plaza principal de la ciudad de México, página de enfrente abajo. Varios días después, una multitud de estudiantes desarmados fue masacrada por miembros de las fuerzas militares y policiales en la plaza de Tlatelolco de la ciudad de México, arriba derecha. En el enfrentamiento, la policía golpeó, detuvo y arrestó a hombres y mujeres con igual violencia, página de enfrente arriba. Poco después de estos acontecimientos se creó el Comité 68, que ha continuado recordando la masacre como un momento definitorio en la historia mexicana mediante marchas, derecha, publicaciones y conferencias. El Comité es una de las fuerzas que impulsa el movimiento en favor de la democracia y los derechos humanos en México

Tlatelolco, que mantiene una exhibición permanente del movimiento.

La lucha del Comité no se basa en nostalgia, sino en un constante análisis de las acciones del Estado en el pasado y el presente. Los activistas sistemáticamente evocan, rescatan y recuperan memorias (personales, sociales y colectivas), procesándolas analíticamente desde el pasado al presente. Como la violencia y ciertas prácticas antidemocráticas continúan existiendo en México, el Comité procura crear una memoria política que conecte al pueblo con su historia.

El Comité trata de arrojar luz sobre ciertos acontecimientos traumáticos, juzgarlos y someterlos a debate, con la

perspectiva de un testigo y de activos ciudadanos que tienen el derecho de reclamar justicia. Este tipo de «política de la memoria» ayuda a indicar el avance del Estado en su «transición democrática». Requiere que México responda de alguna forma y que demuestre públicamente su compromiso en favor de la democracia y la transparencia. ✱

Elaine Carey es autora de Plaza of Sacrifices: Gender, Power, and Terror in 1968 Mexico. José Agustín Román Gaspar es estudiante de doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México.



La película documental *Nuestros desaparecidos* de Juan Mandelbaum relata el período posterior al golpe militar ocurrido en 1976 en la Argentina, cuando decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes izquierdistas, fueron encarcelados, torturados y muertos. En una obra abiertamente personal, Mandelbaum asigna particular énfasis al pronombre posesivo del título. Quiere que sepamos que las personas que fueron detenidas y desaparecidas eran nuestros compatriotas, nuestros colegas y nuestros amigos. Eran nuestras hermanas, nuestros hijos y — como nos enteramos al final de la película en el episodio más desgarrador— nuestros propios padres.

Mandelbaum regresó a la Argentina desde su exilio en los Estados Unidos en el trigésimo aniversario del golpe, buscando saber de Patricia Dixon, una antigua amiga universitaria cuyo nombre había visto por casualidad en una lista víctimas del régimen aparecida en Internet. Patricia había sido una de las más buenas y dulces personas que conoció en la escuela. Había descontado que habría llevado una vida tranquila con marido e hijos, de manera que se sorprendió de verla en la lista de las víctimas. Mandelbaum se dedicó a entrevistar a los familiares y amigos sobrevivientes y a reconstruir la historia de la forma en que ella —junto con Mini Viñas y Jorge Chinetti, dos de sus antiguos colegas de un idílico campo de verano en las montañas— habían aparecido en la lista de aquellos que «habían sido desaparecidos», para emplear el horrible eufemismo común en guerras como éstas.

Un encuentro con la hermana menor de Patricia, que ha conservado una fotografía de

Mandelbaum y Patricia en una fiesta de cumpleaños, conduce a otro con uno de los ex colegas de trabajo de Patricia, que recuerda el creciente terror que los jóvenes activistas —tanto militantes como pacifistas— sentían cuando se iba agravando la represión. Las incursiones nocturnas de los militares, que conducían los fatídicos Ford Falcon, secuestraban a sus víctimas y los llevaban a los centros de tortura, uno de ellos situado en una escuela militar y otro en el notorio Garage Olímpico. De allí, muchos eran llevados en aviones y empujados desde gran altura a las aguas del río de la Plata. El almirante Emilio Massera, que dirigió estos operativos y que nunca fue llevado ante la justicia, tenía un lema especialmente macabro que figurará en las páginas más negras de la historia: «Primero matamos a los simpatizantes, luego matamos a los indiferentes, y después matamos a los tímidos».

Mandelbaum entrevista asimismo a Rafael Beláustegui, industrial y padre de tres hijos —Valeria, José y Martín— que se

adhirieron a una causa juvenil aunque violenta, y fueron muertos por el régimen. También habla con Ruth Weisz, judía alemana que encontró refugio en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial y cuyo hijo Marcelo fue muerto años después en un centro de detención en su país adoptivo. Estas entrevistas proporcionan una triste y final aceptación del pasado, el tipo de aceptación que sólo pueden comprender plenamente los padres que han sobrevivido a sus hijos. «Defendemos la vida lo mejor que podemos», dice Rafael con estoica reserva, «pero si hubiera sabido que perdería a los tres ... no sé ...»

Los mejores momentos de la película son la entrevista final con las dos hijas de Jorge Chinetti y Mini Viñas. En los años de la guerra sucia, era común que a los detenidos les quitaran sus hijos y los dieran en secreta adopción a familias de militares, pero esas dos mujeres tuvieron la suerte de poder crecer con sus verdaderos apellidos. Inés, la hija de Mini, fue criada por sus tíos en California, que nunca le dijeron que su madre le había salvado la vida antes de ser secuestrada y muerta. Ocurrió en el zoológico de Buenos Aires, donde Mini había ido con Inés una tarde.



Nuestros desaparecidos

En un momento casi inconcebible, Mini logró ocultar a la niña cuando la patrulla se acercaba, para que sólo ella pudiera ser secuestrada y soportara torturas y una muerte segura. La horrible verdad de ese momento fue contada años después a Inés, que la relata ante la cámara en medio de incontrolables lágrimas.

La hija de Jorge ayuda a terminar la película con una heroica nota colectiva en una ceremonia en honor de su padre treinta años después de su muerte.

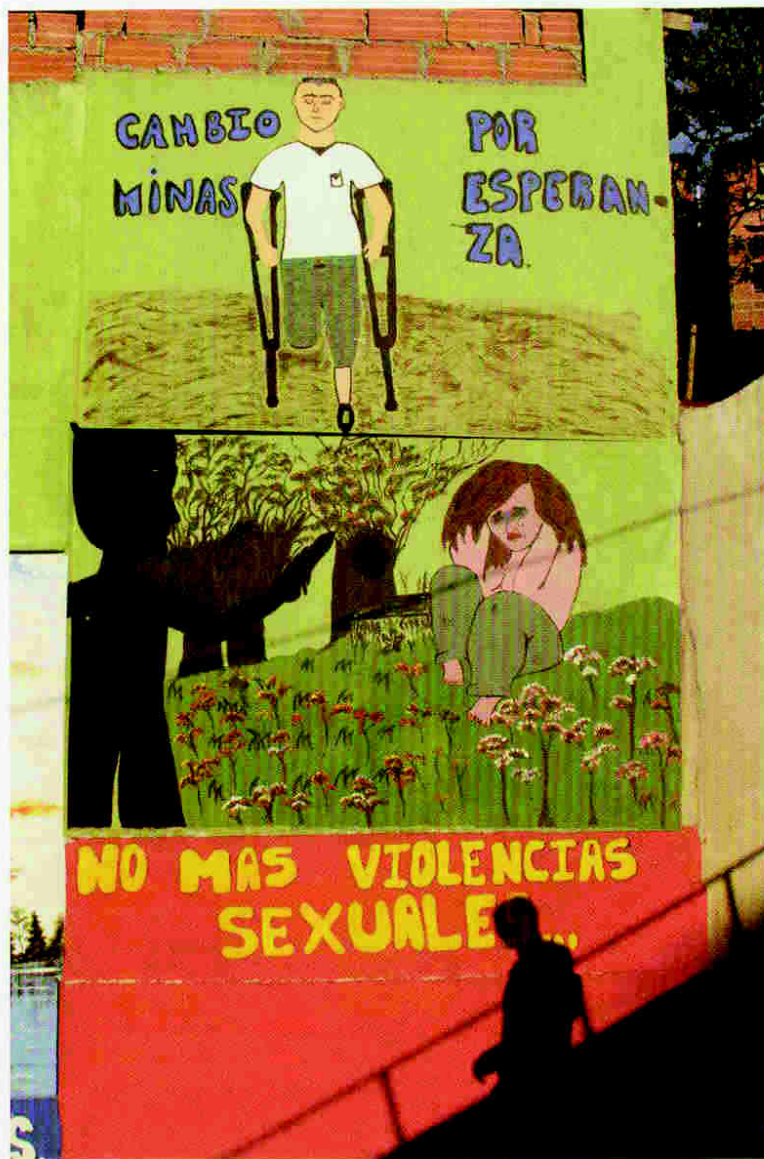
Derecha, Juan Manuel Weisz en el centro de detención conocido como Garage Olímpico, donde sus padres estuvieron detenidos y luego desaparecieron, con la sobreviviente Susana Caride, que había estado detenida allí con los padres de Juan Manuel. Abajo derecha, manifestantes llevando un gigantesco cartel con fotografías de los desaparecidos el 24 de marzo de 2006, fecha en que se conmemoró el trigésimo aniversario del golpe militar. Participaron en esa marcha, de izquierda a derecha, abajo centro, Juan Mandelbaum, Alejandra Dixon, hermana de Patricia Dixon y Mercedes Pérez Sabbi, amiga de Patricia. Abajo izquierda, fotografía de Patricia Dixon, tomada por Juan Mandelbaum en 1973. Recuadro, Alejandra Dixon mostrando la misma fotografía

Hablando con voz firme frente a un micrófono, levanta la cabeza y declara: «Sólo tengo una cosa que decir: Jorge Chinetti, detenido y desaparecido: ¡Presente!». Mandelbaum quiere que sepamos que éste es el verdadero legado de *Nuestros desaparecidos*. ❄

Louis Werner es un productor de documentales que vive en la ciudad de Nueva York y es asiduo colaborador de Américas. Las imágenes son de la película.

Nuestros desaparecidos se transmitirá como parte del programa Independent Lens en Public Broadcast Stations (PBS) en los Estados Unidos en septiembre de 2009. Busque en listas locales las fechas y horas.





Colombia ocupa el tercer lugar después de Camboya y Afganistán en términos de incidentes, representando más del 13 por ciento del total mundial

El alegato en contra de la violencia sexual comparte el mensaje contra las minas terrestres, arriba, en el barrio de Santo Domingo de Medellín. Página de enfrente, Juanes siempre se muestra dispuesto a agradecer a sus partidarios

Juanes, cuyo verdadero nombre es Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nació en Medellín en 1972. Su nombre profesional, una contracción de sus dos nombres, es un apodo que le dio su padre. El cantante, compositor y guitarrista comenzó su carrera en la música en los años ochenta, con un conjunto de metales, *Ekymosis*, antes de lanzarse por sí solo en los años noventa. *Fijate bien* fue su primer álbum como solista, y adquirió fama internacional. El *New York Times*, citando los temas sociales que tocan la realidad de la guerra civil colombiana, elogió a Juanes «por abordar de frente la violencia y la mortalidad». El periódico *Los Angeles Times* calificó al álbum como «una intransigente obra de desilusión e indignación casi nihilista». Con los siete premios Grammy que obtuvo el proyecto, el cantautor pasó a convertirse en uno de los más elogiados e influyentes músicos latinoamericanos de su generación. Los tres álbumes siguientes, *Un día normal* (2002), *Mi sangre* (2004) y *La vida es un ratico* (2007), continuaron la avalancha de elogios y premios.

«Siempre resulta muy difícil hablar con las víctimas», dijo Juanes a *Américas* en una entrevista exclusiva. «Las historias que se escuchan de esa gente son muy tristes. Por ejemplo, se oye de niños pequeños que juegan junto a un arroyo o en un prado, la imagen misma de la inocencia. Luego pisan una mina terrestre, y en muchos casos mueren». Hace tres años decidió que su involucramiento con las minas terrestres requería algo más que sus canciones. Utilizando el nombre altamente simbólico de su segundo álbum, inició la Fundación Mi Sangre, un proyecto que se concentra en las simples pero difíciles tareas de rehabilitar las víctimas de los incidentes causados por las minas terrestres y contribuir a la paz en Colombia.

Lograr la paz en Colombia no ha resultado una tarea fácil. El período de casi medio siglo de contienda civil se remonta a 1948, cuando el asesinato del dirigente político de izquierda Jorge Eliécer Gaitán desató una década sangrienta que los colombianos denominan «La violencia».

Si bien es difícil documentar las cifras exactas, existe consenso de que desde 1990, más de 7.000 colombianos han sido muertos o lesionados por incidentes causados por las minas terrestres. Algunos observadores sostienen que como conse-

cuencia de que muchos de los incidentes ocurren en zonas alejadas, el número de víctimas puede ser muy superior. Un informe reciente del periódico *El Tiempo* de Bogotá sostiene que 1.692 víctimas han perdido la vida y 5.759 han resultado heridas.

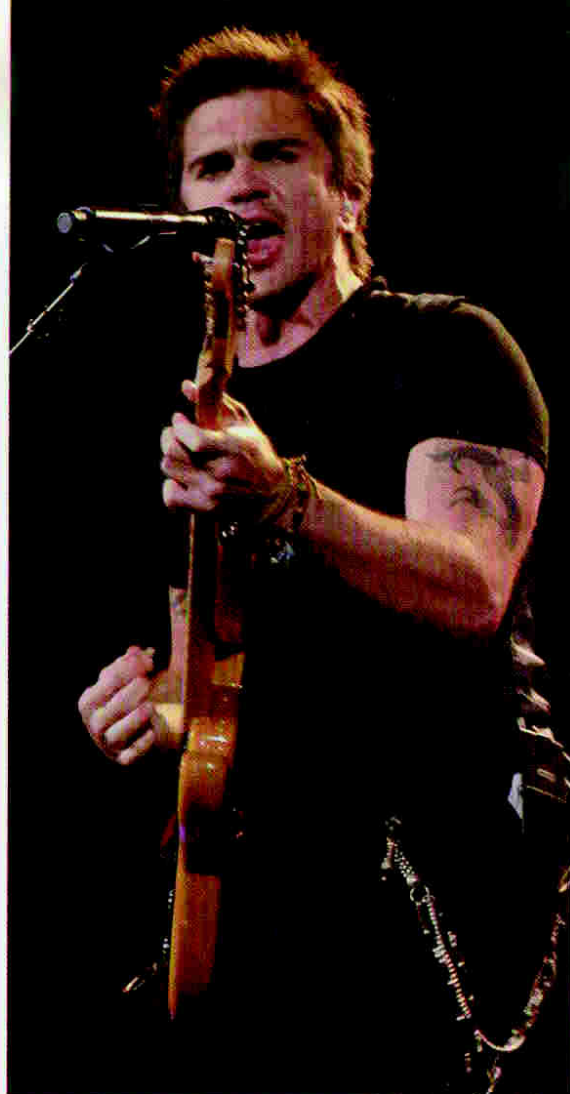
Estas sombrías estadísticas ocultan inquietantes detalles, como la escalada de los incidentes ocurrida en los últimos años. La Cruz Roja Colombiana estima que el 80 por ciento de los incidentes han ocurrido en los últimos cinco años. Entre 1990 y 2000, las estimaciones más favorables indican la ocurrencia de menos de 150 incidentes por año. En los últimos años, sin embargo, la tasa ha aumentado a un punto en que puede llegar a haber dos o tres incidentes por día. La tasa anual de muertes y lesiones físicas se duplicó entre 2002 y 2005. El Coffeelands Landmine Victims Trust, una organización internacional que analiza el problema desde la perspectiva de los productores de café, sostiene que esa situación afecta en forma desproporcionada las regiones en las que se produce café, y cita la elevada tasa de incidentes en el departamento de Antioquia.

De hecho, la presencia de minas terrestres ha sido registrada virtualmente en todos los 33 departamentos de Colombia, y el país ocupa el tercer lugar después de Camboya y Afganistán en términos de incidentes, representando más del 13 por ciento del total mundial. Si bien Colombia no es la única nación latinoamericana que tiene minas terrestres en su territorio —una diversidad de dispositivos sin explotar continúan constituyendo una amenaza en Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Venezuela y en Chile a lo largo de la frontera con Argentina y Bolivia— es el único país de la región en el que los combatientes continúan desplegando en forma rutinaria este tipo de dispositivos. Hay un aspecto particularmente significativo en la crisis colombiana: mientras que en otros países la gran mayoría de las víctimas son civiles, más del 50 por ciento de las víctimas colombianas son militares.

La sociedad colombiana ha respondido al problema en diversas formas, publicitando la crisis fuera de sus fronteras y enfrentando el

creciente número de víctimas dentro del país. La Campaña Colombiana contra las Minas es una organización no gubernamental creada para llevar a cabo los objetivos de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (también llamada Convención de Ottawa), un acuerdo suscrito por 122 gobiernos en 1997. De acuerdo con la Campaña Internacional sobre la Prohibición de Minas Terrestres, la Convención de Ottawa es el instrumento internacional más completo para eliminar del mundo el flagelo de las minas antipersonal; trata desde el uso, la producción y el comercio de minas, hasta la asistencia de las víctimas, la destrucción de minas y la destrucción del almacenamiento de minas. Otra iniciativa colombiana, el Programa Presidencial de Acción Integrada contra las Minas Antipersonal, aborda una amplia gama de aspectos humanitarios con el apoyo de la OEA, Canadá y los Estados Unidos.

Con el agregado de la Fundación Mi Sangre a las iniciativas de los sectores privado y gubernamental, es evidente que Colombia está adoptando medidas decisivas





Las minas, uno de los subproductos más insidiosos de la guerra moderna, afectan virtualmente todos los rincones de esta nación sudamericana de 45 millones de habitantes

vas para afrontar el tema en forma responsable. Lo que preocupa a todos los interesados es la triste verdad de que a pesar de todos los esfuerzos, la lista de víctimas continúa creciendo.

En un impecable pabellón de rehabilitación del centenario Hospital Universitario San Vicente de Paul, Cipriano Padilla Medina irradia una tímida y casi infantil gracia que contradice sus 23 años de ardua vida en las zonas rurales de Antioquia y una reciente tragedia personal. Hace tres meses, mientras patrullaba con una unidad del ejército, el joven soldado pisó una mina terrestre. La explosión le afectó las piernas: perdió una debajo y otra

Página de enfrente: cuando no participa en conciertos o realiza giras promocionando su reciente álbum, Juanes dedica la mayor parte de su tiempo a las víctimas de las minas terrestres a través de su Fundación Mi Sangre. El mes de noviembre pasado, el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza entregó al cantante el Premio Humanitario de la Fundación para las Américas, derecha, en reconocimiento de la valiosa labor que su fundación lleva a cabo en favor de las víctimas de las minas terrestres. La Dra. Diana María Molina Montoya habla con Cipriano Padilla Medina, abajo izquierda, que perdió las dos piernas en un incidente ocasionado por las minas, mientras en el Hospital Universitario San Vicente de Paul, de Medellín, abajo derecha, otra de las víctimas recibe terapia física



©ARCHIVOS DE LA OEA/JUAN MANUEL HERRERA

arriba de la rodilla. Hoy pasa horas en rigurosa terapia física diaria con otras víctimas. La Dra. Diana María Molina Montoya, jefa del departamento de medicina y rehabilitación física del hospital, escucha atentamente mientras Padilla Medina explica una irónica consecuencia de las actividades de colocación de minas. Algunas de las víctimas provienen de los grupos rebeldes que las han colocado. Por la falta de mapas que indiquen exactamente dónde se encuentra el peligro potencialmente fatal, las minas pueden victimizar virtualmente a cualquiera en cualquier momento.

Cuando no está en terapia, el soldado escucha música mexicana y piensa en su hijo de tres años y lo que el futuro deparará. Se siente inspirado por el ejemplo de un pequeño contingente de soldados colombianos, todos ellos víctimas de minas terrestres, que recientemente fueron los primeros montañistas baldados que ascendieron a la cima del Aconcagua, en la Argentina, el pico más alto de las Américas. Su firme determinación, el éxito de su programa de rehabilitación y la eficiente utilización de sus prótesis terminaron de convencer a Padilla Medina de que a pesar de su desgracia, el futuro puede ser promisorio.

«Mientras exista este conflicto interno en Colombia, no habrá forma de eliminar todas las minas terrestres», reconoce Juanes, resignado a librar un esfuerzo de toda la vida para resolver el problema. «Un par de grupos armados fuera de la ley sigue colocando minas terrestres, de manera que al mismo tiempo que se destruyen varias de ellas, se ponen otras cien, y cuando se pone una nueva mina, puede permanecer activa por espacio de cincuenta años. Es una especie de terrorismo que se

impone a quienes viven en esas zonas rurales. Creemos que actualmente existen en el país alrededor de 125.000 minas terrestres, de manera que si el conflicto terminara, es imposible imaginar a Colombia sin minas».

Cuando se le ocurrió la idea de crear su propia fundación, el cantante pensó de inmediato en una vieja amiga para que encabezara el esfuerzo diario. «Tatiana Sánchez y yo somos buenos amigos», dice refiriéndose a su amiga de Medellín con quien son compinches desde la escuela secundaria. «Cuando pensé en la fundación, la primera persona que llamé fue a Tatiana, porque conocía su compromiso en favor de Colombia».

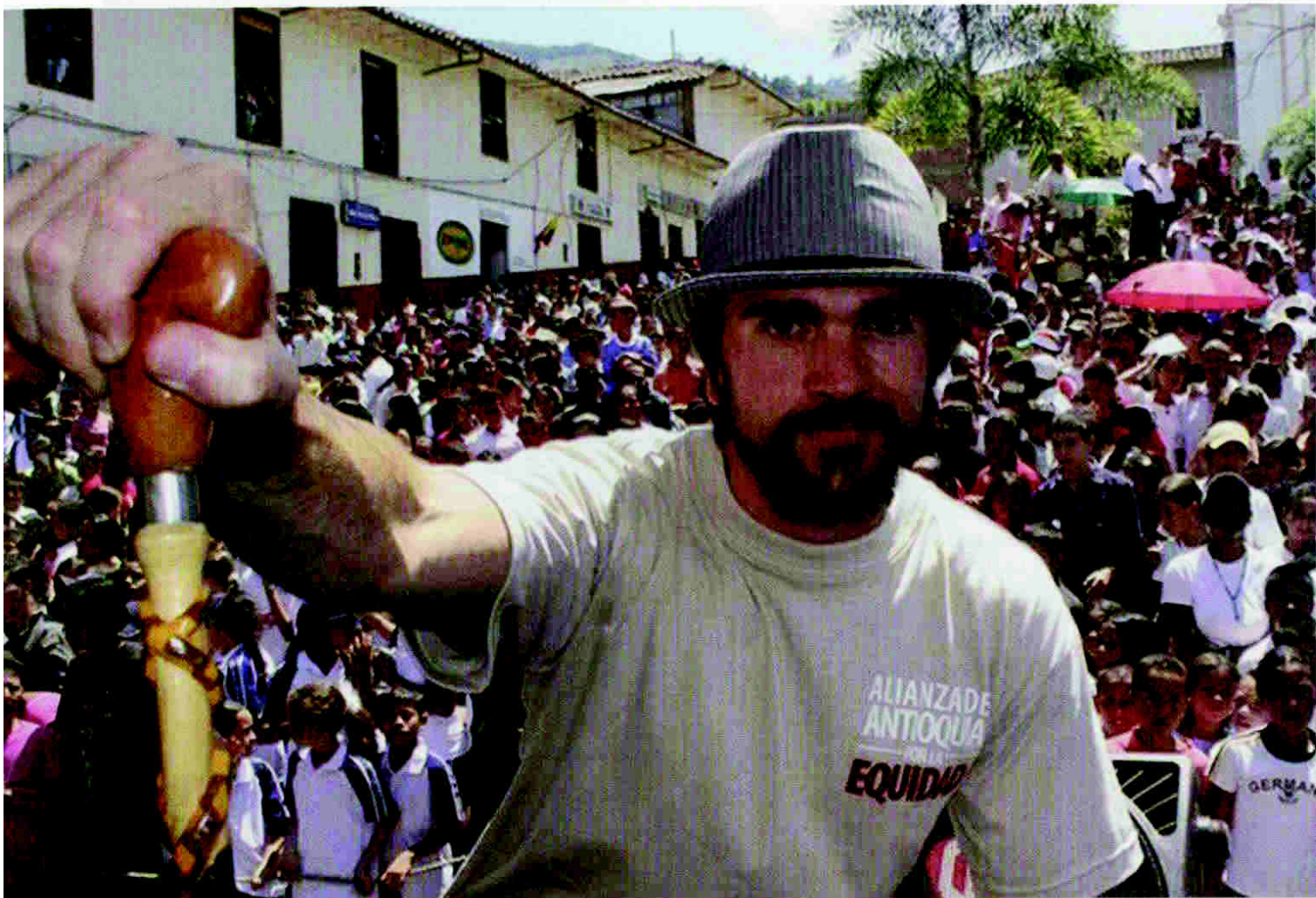
Como directora ejecutiva de la fundación, Sánchez dice que la organización le permite convertir un sueño en realidad. «Habíamos sido amigos desde la adolescencia», recuerda, «y nunca habíamos dejado de vernos. Para mí fue maravilloso cuando oí la propuesta, porque quería trabajar más intensamente en una causa

social». Tatiana Sánchez supervisa el personal constituido por nueve personas y trabaja diariamente en una amplia gama de temas relacionados con las minas terrestres. Sus aliados más cercanos son gobiernos y fundaciones de Europa y Colombia. La principal fuente de financiamiento proviene del propio Juanes, de contribuyentes de España y Alemania y de Exxon Mobil de Colombia. «El apoyo de Juanes es fundamental», dice la directora. «Hablo con él todas las semanas. Está muy atento a las necesidades de la fundación y genera muchas nuevas ideas. Lo más importante es que es nuestro gran embajador y contribuye enormemente a la adquisición de recursos adicionales».

La labor de Juanes y su fundación fue recientemente reconocida por la Organización de los Estados Americanos y la Fundación para las Américas, entidad sin fines de lucro afiliada a la OEA. En una ceremonia que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2008 en Washington, el Secretario General José Miguel Insulza confirió al can-



©WABK-HOUSTON/121



GETTY IMAGES

tante el primer Premio Humanitario de la organización. Además de reconocer la dedicación de Juanes en favor de las víctimas de las minas terrestres, el premio también tiene por objeto llamar la atención sobre los problemas ocasionados por este tipo de armas y dar publicidad a la labor que realiza la OEA en la destrucción de las minas terrestres y su apoyo a las víctimas de este flagelo.

La OEA ha estado promoviendo su Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal desde 1991, y la ayuda financiera y la asistencia técnica del programa han permitido declarar libres de minas terrestres a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Suriname.

«Pero aún es mucho lo que queda por hacerse: la OEA continúa asistiendo en la destrucción de minas en Nicaragua, Colombia, Ecuador y Perú, y es absolutamente imperativo que redoblemos nuestros esfuerzos por sostener esta tarea»,

declaró el Secretario General José Miguel Insulza en una reciente reunión celebrada para procurar coordinar las contribuciones de países donantes a los programas de eliminación de minas. Agregó asimismo que «miles de sobrevivientes de minas terrestres aún necesitan nuestra ayuda para recuperarse de sus lesiones y mantener a sus familias».

El programa de acción integral contra minas ha permitido la destrucción de más de 200.000 minas, la eliminación de más de un millón de minas de reserva, la asistencia a 1.250 víctimas, incluso mediante la provisión de rehabilitación total y programas de reintegración económica y social en la sociedad, y la información de alrededor de un millón de personas en más de 2.500 comunidades en riesgo sobre el peligro que representan las minas en las cercanías.

Arriba, Juanes rodeado de admiradores en Ituango, Colombia. El Parque de la Paz de Juanes tiene áreas deportivas y recreativas para personas con sillas de ruedas e instalaciones para la rehabilitación de los incapacitados. También contiene un centro de computación para discapacitados, abajo

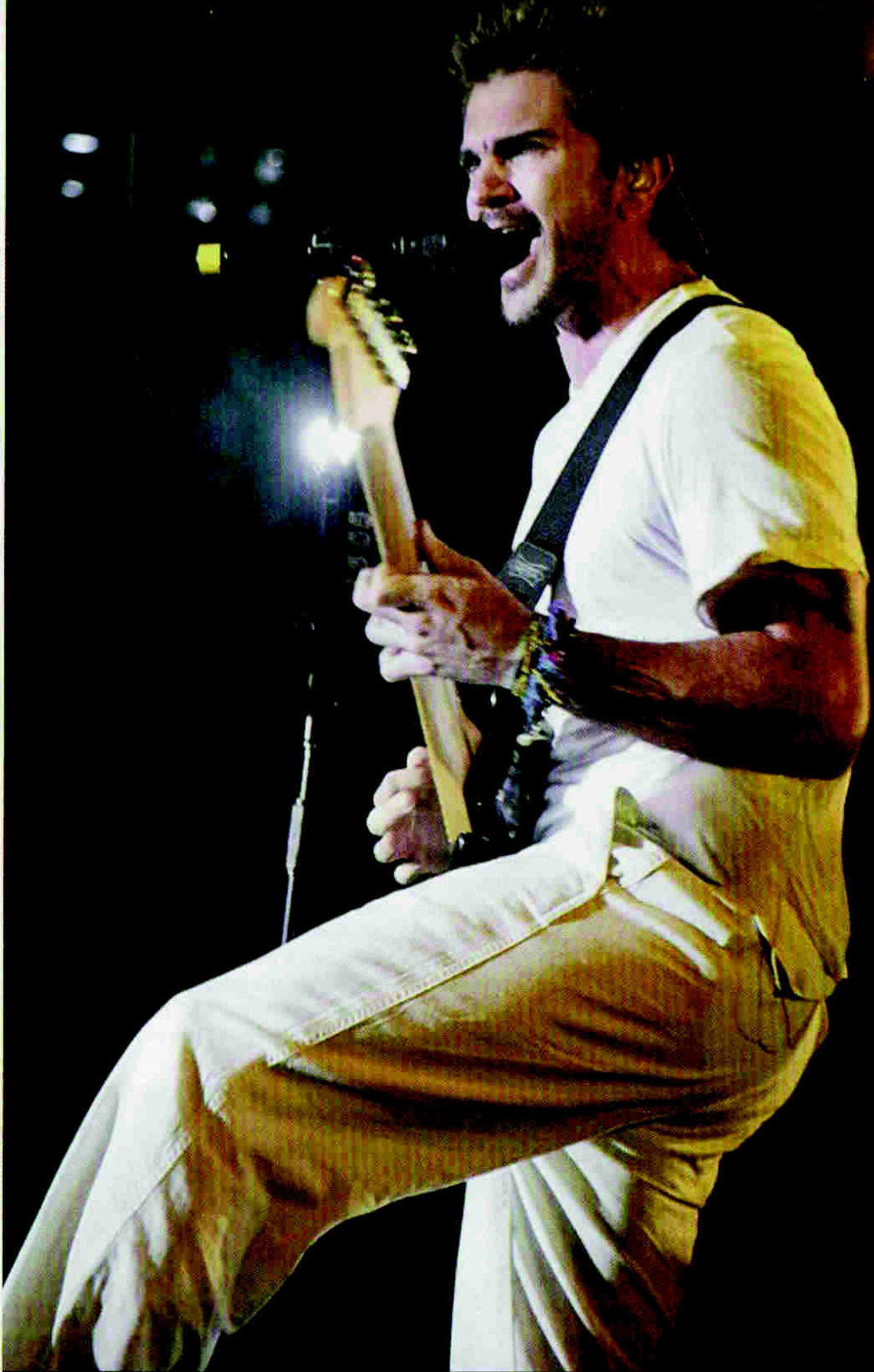


Juanes, que ya está trabajando en su próximo álbum, dice que trata de evitar el tipo de mensaje que la gente recogerá de la letra de sus canciones. Si bien canciones como *Fíjate bien* y *Mala gente* están llenas de simbolismo, a veces su mensaje no es interpretado correctamente. Por ejemplo, la letra de *La camisa negra* fue adoptada como una especie de himno por los neonazis italianos. Al mismo tiempo, fue prohibida en la República Dominicana porque los censores consideraron que era demasiado sugestiva sexualmente. «Te volverías loco si trataras de averiguar lo que la gente interpretaría de tus obras», agrega Juanes. «Sólo escribo sobre lo que siento en ese momento. En el nuevo álbum tendremos un poco de todo, porque todavía me preocupa la realidad del mundo. ¿Para qué estamos aquí? Pero también me interesan los temas colombianos». Algunos de esos, indudablemente reflejarán su aguda capacidad de expresar a través de sus poéticas letras los temores y las aspiraciones cotidianas de sus compatriotas. «Cuando los visito», dice Juanes refiriéndose a las víctimas de las minas terrestres, «siempre encuentro ejemplos de héroes, porque son gente fuerte. Tienen almas fuertes. Aún cuando experimentan cosas como éstas, buscan superarlas, de ser alguien. Quieren seguir luchando por sus familias y su país».



Mark Holston es asiduo colaborador de Américas. El autor desea agradecer la colaboración a este artículo del Intercontinental Hotel en Medellín y el Crowne Plaza Tequendama Hotel de Bogotá.

CORTESÍA DE FERNAN MARTINEZ COMMUNICATIONS



Si bien es difícil documentar las cifras exactas, existe consenso de que desde 1990, más de 7.000 colombianos han sido muertos o lesionados por incidentes causados por las minas terrestres